

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 17º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-20818-2019
CARATULADO : REIMAN/FISCO CDE (HOSPITAL DE
CARABINEROS)

Santiago, treinta de Noviembre de dos mil veintidós
VISTOS:

A través de presentación ingresada por Oficina Judicial Virtual con fecha 26 de junio de 2019, comparecen doña Magdalena Garcés Fuentes y Sebastián Velázquez Díaz, abogados, domiciliados en calle Sótero del Río N° 326, oficina 7070, comuna de Santiago, en representación de don **Juan Manuel Segovia Arrué**, chileno, casado, jubilado, residente en Estados Unidos y domiciliado para estos efectos en calle Río Bueno N° 357, Cerro San Roque, comuna y ciudad de Valparaíso; de don **Carlos Enrique González Mejías**, chileno, soltero, docente, domiciliado en Simsonstrasse 53, 45147 Essen, Alemania; de don **Carlos Vidal Alvarado González**, chileno, viudo, jubilado, domiciliado en 30, Melton Drive. Edgbaston, Birmingham, CP B152ND, Gran Bretaña; de don **Sergio Jacinto Villar Veloso**, chileno, casado, jubilado, domiciliado en Jorge Alessandri N° 546, departamento 1.205, Parque Urbano, comuna y ciudad de Concepción; y de don **Víctor Manuel Reiman Campos**, chileno, divorciado, empresario, domiciliado en Pasaje Dos Casa 608, Villa El Morro, comuna de Chihuayante, Región del Biobío, quienes interponen en juicio ordinario, demanda de indemnización perjuicios por daño moral en contra del **Fisco de Chile**, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago.

Explican que los hechos que motivan la demanda acaecieron los meses previos y posteriores al golpe de Estado producido en Chile el 11 de septiembre del año 1973 y fueron cometidos en contra de los demandantes por funcionarios de la Armada de Chile y por empleados fiscales de dicha rama militar, todos funcionarios públicos, quienes detuvieron de manera ilegal e infligieron torturas en contra de sus pares de armas, marinos y suboficiales que no estaban de acuerdo con la asonada golpista.

Añaden que cada uno de los demandantes fue reconocido como víctima por la Comisión Nacional sobre prisión Política y Torturas, conocía como “Comisión Valech”.

Luego de un relato sobre los antecedentes generales que motivaron el golpe de estado, indican que en la Armada comenzó a gestarse una fuerte deliberación interna por parte de la oficialidad, la que se tradujo primero en



Foja: 1

arengas a la tropa y en el adoctrinamiento del personal, pero este proceso, fue acompañado de un trabajo de contrainsurgencia, encabezado por la Inteligencia Naval, específicamente el Departamento 51, que inició un proceso de seguimiento e identificación del personal constitucionalista y proclive al Gobierno Popular. Así, para los primeros meses del año 1973, la deliberación de la oficialidad y el actuar conspirativo de la misma, se manifiesta abiertamente, acudiendo a reuniones para su concretización.

Explican que en la primera semana de agosto se reunieron en cada barco a los suboficiales, los sargentos y los marineros por separado, llamándolos a estar preparados para apoyar un golpe de Estado que derrocaria al gobierno. En esta oportunidad se discutieron planes tácticos. Así el día 7 de agosto de 1973, el capitán de fragata Pedro Barahona Carrera, jefe de relaciones públicas de la marina, en un comunicado oficial, anunció que se había detectado “la gestación de un movimiento subversivo de dos unidades de la escuadra, apoyado por elementos ajenos a la institución”, lo que provocó que a bordo de los barcos “Blanco Encalada” y “Latorre” se detuviera a un grupo de marinos dirigidos por el sargento Juan Segundo Cárdenas, que se rehusaron plegarse a un movimiento subversivo incitado por la oficialidad, relatando los hechos posteriores a este acto.

Relatan que consumado el golpe militar que los mismos marinos detenidos habían denunciado, las acciones de tortura y las aberraciones procesales se acrecentaron. Se los sometió a nuevas vejaciones, se les tipificaron e imputaron nuevos delitos, se les condenó a penas altísimas, se les denostó públicamente y la mayoría fue enviada al exilio.

En cuanto a los hechos ocurridos respecto de cada uno de los demandantes, indican que don **Juan Manuel Segovia Arrué**, reconocido en el Informe Valech con el N° 22.920, fue detenido el 07 de agosto de 1973 en su lugar de trabajo, junto con otros marinos, quienes fueron sacados esposados del buque Blanco Encalada, por un Sargento y dos Infantes de Marina armados con metralletas, conducidos al Cuartel Silva Palma en un minivan y al llegar fueron bajado a culatazos hasta una celda semi oscura, donde divisó a más detenidos. Al día siguiente fue trasladado a una celda de castigo, y posterior a eso a una pieza con literas, allí también llegaron otras personas, quienes se encontraban visiblemente torturados, pues venían trasladados en avión desde Talcahuano.

Días más tarde, fue llevado al Fuerte Borgoño, donde lo golpearon repetidas veces. Posteriormente fue interrogado por el Fiscal don Víctor Villegas y el teniente don Pedro Benavides Monzani. Preguntaban por un tal “Plan Z”, que tenía por objetivo bombardear Valparaíso y asesinar oficiales, así también, preguntaban por su participación en partidos políticos. No obstante, a su desconocimiento respecto al tema, continuaban las golpizas y amenazas si no cooperaba. Seguido de esto, es obligado a firmar



Foja: 1

lo que un marino escribiente entregó al Fiscal, de lo contrario sería enviado a otro interrogatorio en Talcahuano. El día 01 de septiembre de 1973 le informaron que ya no pertenecía a la Armada, y que sería trasladado a la cárcel de Valparaíso (sin condena). En ese lugar, sufrió innumerables agresiones, dormía en el suelo lleno de excremento humano, con constantes amenazas de hacerlo desaparecer.

Relatan que el 13 de diciembre de 1973 trasladaron a los presos a un lugar desconocido, ellos iban vendados, privados de visión. Más tarde supo que se encontraba en Melinka, en la parte alta de la Cordillera de la Costa, llamado Colliguay en Limache, a cargo del teniente Juan González (I.M.), Suboficial Aguayo (I.M.), Cabo Soto (I.M.) y Cabo Bustos (I.M.), donde tenían un campo de prisioneros de guerra a cargo de la Infantería de Marina, mandados por un oficial llamado “Ruby” o Juan González. En ese lugar fue torturado física y psicológicamente, amenazado continuamente de muerte. Habían alrededor de 200 prisioneros, en las mañanas los hacían formar en el centro del campamento, quienes llegaban últimos a la formación los castigaban metiéndolos en pozos sépticos con desechos fecales, después los hacían correr alrededor del campamento disparándoles en los pies y azotándolos con una ballesta metálica, después tenían que arrastrarse por el canal de agua sucia y barro, para luego ser encerrados mojados y con llagas en el cuerpo.

Agregan que luego de ocho meses, fueron trasladados a Ritoque, un campamento en Quintero. Allí se encontraban más prisioneros que habían sido trasladados desde la Isla Riesco en la Patagonia, entre los que también se encontraban ministros, senadores, diputados, doctores y abogados del Presidente Salvador Allende, quienes relataban las torturas a las que habían sido sometidos.

Tres meses después, volvieron a la cárcel de Valparaíso el 25 de abril de 1975, con derecho a visitas los fines de semana por media hora. En ese momento pudo tener contacto con su familia, quienes también sufrieron vejaciones por parte de gendarmería.

Luego de tres años y tres meses, en agosto de 1976 salió en libertad, su condena había sido de tres años y un día. Fuera de la cárcel siguió siendo víctima de acoso constante por la DINA junto a su familia, razón por la cual optan por el exilio.

Explican que su familia carga con consecuencias psicológicas hasta hoy, sobre todo su hijo Giovani Segovia, quien tenía cuatro años al momento de su libertad, se encontraba muy afectado, presentaba trastornos del lenguaje y signos de depresión que con el tiempo fueron empeorando, sufriendo convulsiones y a los catorce años, en el exilio a Canadá, el médico



Foja: 1

le diagnosticó esquizofrenia como consecuencia del trauma vivido durante la dictadura.

Respecto del demandante don **Carlos Enrique González Mejías**, reconocido en el Informe Valech con el N° 10.345, fue detenido el 09 de agosto de 1973, cerca de la cinco de la tarde, cuando había terminado su horario de trabajo en el Taller de Torpedo perteneciente a ASMAR Talcahuano. Se encontraba en el bus con los otros empleados del taller para salir de “franco,” cuando subió un oficial uniformado exigiéndole que bajara. Una vez abajo, le ordenaron subir a un Jeep, en el que un grupo de Infantes de Marina con uniforme de combate, lo apuntaron con fusiles ametralladoras, para luego trasladarlo al recinto de entrenamiento militar ubicado en Las Canchas, “Fuerte Borgoño”. Una vez allí, Infantes de Marina lo hicieron bajar a culatazos del jeep y lo pusieron frente al edificio principal del lugar, apuntándolo con los fusiles ametralladoras. Más o menos después de 5 minutos, salió el capitán Kohler enfurecido, se dirigió directo hacia él apuntándolo con una pistola hacia su cabeza, se acercó y le dio una “patada” en los testículos con sus botines militares. A causa del dolor, el Sr. González Mejías cayó al suelo y recibió golpes de pies (“patadas”) en diferentes partes del cuerpo. De este modo lo obligaron a levantarse y dirigirse trotando hacia una especie de “establo”, que consistía en unas casetas con puertas abiertas donde había otras personas vestidos como “comandos”, quienes estaban esperándolo. Le ordenaron desnudarse y le propinaron nuevamente golpes. Desde ese lugar, a unos 70 metros pudo ver a personas desnudas arrastrándose “punta y codo”, en un terreno de tierra pedregoso bajo alambres de púa; al mismo tiempo algunos uniformados los “picoteaban” y los golpeaban con un palo.

En tal contexto, de pronto uno de los uniformados le ató los pies con una cuerda, lo levantó cabeza abajo a una altura de un metro y medio y procedió a sumergirlo dentro de un tambor (barril) con agua turbia y llena de excrementos. Lo mantuvieron bajo del agua por bastante tiempo y al mismo tiempo lo “picoteaban” y le golpeaban diferentes partes del cuerpo, provocándole dolor para que abriera la boca. A causa de la desesperación y los golpes, absorbía agua por la boca.

Indican que el demandante no puede decir cuando duró el suplicio, pues para él era interminable. Cuando en sus pensamientos, su capacidad de resistencia para no ahogarse estaba por vencerlo, lo sacaron del agua, escupió agua turbia y excrementos, para repetir el mismo procedimiento unas tres veces.

Después de haberlo sacado del barril, lo tiraron al suelo y le soltaron las ataduras de los pies, momento en que uno de los torturadores intentaba introducirle un palo por el ano, ante lo cual se defendía “tirando patadas” y revolcándose, protegiéndose frente al intento de la agresión y con fuerzas



Foja: 1

extraídas no sabe de dónde, se levantó y se puso de espalda a la pared del establo (caseta), pero siguió siendo golpeando con el palo, hasta que en algún momento este acto se detuvo.

Posteriormente, estando aún desnudo, fue llevado al terreno de alambre de púas y lo obligaron con golpes a tirarse a tierra y avanzar “punta y codo”, arrastrándose en la tierra empedrada, momento en que apareció otra vez el uniformado del palo, golpeándolo con la punta del mismo en el cuerpo para que hiciera el “punto y codo” más rápido.

En la noche durmió en algún lugar de ese recinto, había otras personas que hasta ese momento no conocía. En algún momento por la noche sacaron a dos personas, no se dio cuenta quiénes eran, y él se hizo el dormido en un estado de pánico por lo vivido; después de algunos minutos escuchó un par de disparos, en ese momento se imaginó lo peor y pensó que los sacarían de a uno y que los matarían, ya que las personas que sacaron no volvieron al lugar donde estaban.

Al día siguiente fue trasladado a otro lugar, donde le hicieron declarar sobre las intenciones de su grupo, pero más que una declaración de los hechos, se trataba de amedrentarlo para firmar una declaración preparada que decía que formaba parte de un grupo que quería provocar acciones violentas al interior de la Armada, que tenían la intención de poner bombas, que eran un grupo extremista, que querían crear caos y matar oficiales. El actor negó estos hechos una y otra vez, porque eran absolutamente falsos, a pesar de que era amenazado de que sería llevado otra vez al campo de tortura. Después de un largo tiempo, alrededor de una hora bajo presión y amenazas, le propusieron darle 15 minutos para que “pensara”; lo dejaron por un tiempo en esa sala y sobre la mesa dejaron una pistola. Al cabo de un tiempo aparecieron las mismas personas que le tomaban la declaración y le dijeron que tenían otra información para él: le mostraron una foto de su madre y de su hermana, diciéndole que de él dependía de que a ellas no les pasara nada pues la tenían en su poder, detenidas. En ese momento el Sr. González Mejías se quebró, sobre todo al recordar lo que le habían hecho, pensaba que con ellas sería peor y les dijo llorando que por favor las dejaran tranquilas y de que él estaba dispuesto a firmar lo que quisieran, lo que en definitiva hizo, pese a desconocer qué fue lo que suscribió, pues lo único que deseaba era que a su familia no le pasara nada.

Explican que un día después -por lo que recuerda el demandante- fue llevado a la Fiscalía Naval para que le leyeran su declaración y le informaran en qué estado de detención quedaba, lugar en que se encontró con sus compañeros de detención; hasta ese momento sólo conocía a un par de ellos.



Foja: 1

Los trasladaron a la cárcel de Concepción ubicada en Chacabuco N° 70 y fueron repartidos en 2 calabozos. Recuerda que un día de septiembre, después del golpe militar, los sacaron sin aviso y sin ninguna explicación, a los 21 ex miembros de las Fuerzas Armadas que estaban detenidos, trasladándolos a un pabellón donde se encontraban los presos políticos. Dos días después los regresaron a los calabozos anteriores, pero uno de los presos políticos les contó que seis de sus compañeros habían sido condenados a muerte y fueron fusilados el día que los habían trasladado, a las 6 de la mañana. Las personas fusiladas habían sido instaladas en el calabozo que normalmente habitaban los marinos, durante la noche. Para don Carlos fue un tremendo choque psicológico saber que estaba habitando el lugar donde seis personas habían pasado sus últimas horas de su vida. Por su cabeza pasaban muchas cosas, se imaginaba sus últimos pensamientos, sus tristezas, el no poder despedirse de sus familiares, del futuro que le esperaba a su familia, etc.

Explican que efectivamente, en cumplimiento de una sentencia de un Consejo de Guerra, el 22 de octubre de 1973 fueron fusilados en un recinto de Gendarmería ubicado entre Concepción y Talcahuano, cuatro militantes del Partido Comunista: Vladimir Daniel Araneda Contreras, Bernabé Cabrera Neira, Isidoro del Carmen Carrillo Tornería y Danilo González Mardones.

Precisa que para el actor este hecho constituyó una situación de tortura psíquica que se mantuvo por bastante tiempo, quizás no comparable con la tortura física que vivió a partir de su detención, sino también las situaciones que vivieron diferentes personas, especialmente sus familiares, su madre, su hermana, su hermano. En el caso de su hermano, producto de sus detenciones y las torturas sufridas en la Isla Quiriquina, quedó con traumas psíquicos profundos, que lo llevaron en agosto de 1976, a suicidarse mientras vivía con su madre y don Carlos en Alemania.

Respecto del demandante don **Carlos Vidal Alvarado González**, reconocido en el Informe Valech con el N° 955, fue detenido sin orden judicial el sábado 28 julio de 1973 en la Escuela de Ingeniería de la Armada. En esa época tenía 12 años y medio de servicio en la Armada, estaba casado, tenía 4 hijos, el menor de 10 meses y la mayor de 6 años. Tenía 29 años y su cónyuge 25 años.

El día de su detención, un mensajero de la guardia le informó que el oficial de guardia quería verlo, agregando “parece que va a ir a buscar un buque al extranjero”. Al llegar a la sala, el oficial de guardia le comunicó que el Comandante quería verlo en su oficina, lo que lo alertó porque no era normal que el Comandante de la Escuela de Ingeniería estuviera un día sábado presente. Se dirigió a su oficina, sintiendo que algo no está bien, ya que a la entrada de la oficina del Comandante se encontraban dos



Foja: 1

marineros con equipo de combate. Cuando entró, el oficial con muy mala cara le dijo que tenía información de que él pertenecía a un grupo de extrema izquierda. Don Carlos le respondió, pero el Comandante afirmó que tenía información del servicio de inteligencia y por lo tanto quedaba arrestado. Así fue escoltado a un camión naval cubierto con toldo, dentro del cual estaba el cabo José Jara.

Agregan que arrestaron a varios marinos “sospechosos” y los llevaron con destino desconocido, pero después supieron que habían sido llevados al Cuartel Silva Palma. El actor quedó incomunicado en una celda muy pequeña, en la que apenas podía moverse, con una ventanilla enrejada de 10 cm., junto al cabo José Jara y el cabo Villouta que estaban en dos celdas contiguas, permanecieron encerrados e incomunicados por lo menos 9 días seguidos, desde el 28 de julio, hasta el 5 de agosto. Entre los días 3 y 4 de agosto, fue interrogado dos veces, para luego devolverle al mismo lugar, manteniéndosele la calidad de incomunicado, la que fue levantada unos días antes de que llegaran detenidos un grupo mayor de integrantes de la escuadra, los días 8 y 9 de agosto de 1973.

Relatan que la cónyuge del demandante, al notar que no había vuelto a casa, el lunes 30 de julio concurrió personalmente a preguntar porque él no había vuelto a su casa. Le respondieron que su marido había sido nominado para ir a buscar un buque al extranjero, pero ella les contestó que nos les creían pues su cónyuge no había ido a su casa a despedirse de ella y sus hijos y no llevaba ropa para cambiarse, e incluso le afirmó al Comandante de la Armada que la atendió que le estaba mintiendo, ya que ella había escuchado que lo habían enviado “al Silva Palma”. El Comandante de la Escuela le preguntó si había concurrido sola al lugar y ella mintió ya que sintió miedo, asegurando haber concurrido con su hermano y su primo, que la esperaban en la puerta, aunque en realidad había ido sola. A partir de ese día, ella notó que estaba siendo vigilada las 24 horas el día, lo que apreciaba desde una ventana.

En cuanto a lo que sucedía con el demandante, dicen que durante los interrogatorios, todas las preguntas que les hacían, cómo se darían cuenta después, parecían extraídas de lo que posteriormente se conoció como “Plan Zeta”, un invento de los propios militares para justificar el golpe de Estado: les preguntaban cómo pensaban arrestar a los oficiales, si los iban a matar, si iban a atacar la Escuela Naval o las poblaciones donde vivían los oficiales y sus familias. También les preguntaban qué día pensaban “volar” el departamento de municiones, qué represalias iban a tomar con aquellos que no los apoyaran, etc. Les decían que si nombraban algún oficial de alta graduación (que supuestamente pensaban atacar) podría recuperar su libertad y si nombraba algún senador, sería mucho mejor. No obstante, a veces el interrogatorio subía a otro nivel y aparecían frases de alto calibre y



Foja: 1

amenazas. Todos los interrogatorios se llevaron a cabo en el Cuartel Silva Palma por parte del fiscal Ginsberg (designado Fiscal administrativo), quien para tratar de conseguir información le aplicó tortura psicológica, amenazándolo con arrestar a su esposa y a su hijo de 10 meses si “no hablada” o colaboraba con las muchas acusaciones que el fiscal esgrimía en su contra. Tanto el demandante como sus compañeros intuían la falta de defensa jurídica, pero era una acusación de la Armada contra cada uno de ellos.

Agregan que el actor no sabe si finalmente el fiscal Samuel Ginsberg dictó sentencia, sólo que habría entregado el caso al almirante Merino, pero según relatos recientes del Fiscal Ginsberg en la prensa y en el proceso judicial por torturas que sustancia el Ministro Jaime Arancibia, el caso de don Carlos y los detenidos de la Escuela de Ingeniera no daba para más que unos días de arresto.

Indican que la detención de los marinos de la Escuela de Ingeniería, entre los que se encontraba el Sr. Vidal González, así como el periodo que permanecieron incomunicados y las interrogaciones a las que fueron sometidos, fue absolutamente desconocida para la opinión pública. No tuvieron visitas ni posibilidad alguna de conversar o ser visitados por algún abogado, sentían que la marina, jurídicamente, podía hacer lo que quisiera con ellos. La situación de detención se conoció cuando arrestaron a los marinos de la escuadra y un par de semanas después aparecieron algunos abogados, pero su parte nunca conversó con alguno.

Agregan que a partir del 8 de agosto de 1973 su representado y compañeros vieron cómo llegaban detenidos marinos de distintas reparticiones y fueron testigos presenciales de la manera inhumana en que los estaban tratando. Los marinos estaban siendo torturados y llegaban al Cuartel Silva Palma en estado deplorable, muchos de ellos no podían sostenerse en sus piernas y eran llevados casi en andas por los Infantes de marina a las celdas de incomunicados. En el subterráneo del Cuartel Silva Palma el demandante recuerda haber visto llegar a Juan Cárdenas, Pedro Lagos, Jaime Salazar, Pedro Blaset, Oscar Carvajal y otros más, muchos de ellos casi irreconocibles por los efectos de las torturas, que se reflejaba en sus rostros, rememorando que le daban ganas de llorar de impotencia por lo que la oficialidad le estaba haciendo a sus compañeros.

Añaden que cuando se produjo el golpe de Estado su situación empeoró, cambiaron las caras de los guardias que los custodiaban en el Cuartel Silva Palma y sus propios compañeros los empezaron a tratar de traidores. Así, el mismo día 11 de septiembre de 1973, un suboficial a cargo de la población le dijo a su cónyuge que tenía una orden de arresto, por lo que le recomendó tomar a sus hijos e irse lo más pronto posible. Ella llamó a una amiga que llegó con su hermana. En el departamento se encontraba



Foja: 1

también una sobrina de 13 años. Las tres mujeres y la sobrina adolescente decidieron llevarse a los cuatro niños e irse a un lugar seguro. Ya de noche lograron salir y se movieron a través de quebradas y cerros, mientras un helicóptero rondaba en las alturas con los reflectores apuntándolas. En la oscuridad, la hija de 6 años de don Carlos se cayó a un hoyo de casi un metro de profundidad, afortunadamente pudieron sacarla. Debieron dar un largo rodeo antes de llegar a destino. La cónyuge del demandante perdió todo contacto con su familia por más de dos meses pues fue albergada en casa de los padres de una amiga, cuyo marido también era marino.

Varios días después, la sobrina de 13 años fue a buscar ropa para los hijos del demandante, y cuando estaba abriendo la puerta del departamento aparecieron Infantes de marina y allanaron el mismo en presencia de la niña. Ella relató que los Infantes de marina portaban fusiles y llevaban “cuchillos largos” al costado, se trataba de yataganes. Durante el allanamiento, los Infantes de marina rompieron los colchones y destruyeron casi la mitad de las pertenencias del hogar. A mediados de octubre, miembros de la familia de la cónyuge del actor lograron sacar los enseres que se habían salvado, los que la señora vendió para sobrevivir.

Indican que en el mes de octubre de 1973, los marinos detenidos en la Escuela de Ingeniería, entre ellos el acto, José Jara y Tomás Alonso Molinet fueron dados de baja y trasladados a la Cárcel Pública de Valparaíso. Los marinos de la escuadra ya estaban en la cárcel pública, aislados del resto de la población penal y de los presos políticos. Los marinos de la Escuela de Ingeniería fueron puestos en aislamiento junto a los otros marinos detenidos. En tal situación pudo saber -según contaban los marinos que llegaron primero- que personas de derecha trataron de contratar a presos comunes para eliminarlos, pero no tuvieron éxito, ya que los presos comunes se habían negado. El actor recuerda que durante el aislamiento hubo un gran temblor, ante lo cual los gendarmes abrieron todas las celdas, tanto los presos comunes como los presos políticos quienes pudieron salir al patio principal, pero el recinto donde estaban los marinos permaneció cerrado, lo que les granjeó aún más simpatías de los presos comunes, que repudiaron el hecho de que Gendarmería no les abriera las puertas dejándolos a su suerte.

Señalan que mientras estuvieron detenidos en la cárcel pública sufrieron actos en su contra por parte de funcionarios de Gendarmería. Varias veces los hicieron correr en el patio principal junto a los presos políticos y a los presos comunes, todos juntos. Durante las vueltas, los que quedaban en las orillas interior y exterior estaban a merced de los gendarmes, ubicados cada 5 metros, quienes les pegaban con palos durante el tiempo que duraban las vueltas. La única manera de evitar los golpes era correr en el centro, el que se caía corría el peligro de que muchos pasaran



Foja: 1

corriendo sobre él, lo que ocurrió varias veces. Además recuerda que los funcionarios de Gendarmería actuaron de manera “inhumana y represiva”, especialmente con sus familias cuando los visitaban, a las mujeres las revisaban por todas partes, según ellas, era muy humillante como las trataban.

Cuentan que en dos ocasiones, Infantes de Marina allanaron la cárcel de Valparaíso, fuertemente armados. Ellos robaron y golpearon “cualquier cosa que tuviera tintes de comunismo”. Un preso adulto mayor fue golpeado por llevar una corbata roja, lo hicieron correr 100 metros pegándole con la culata de los fusiles por todas partes. Los Infantes de marina buscaban entre los más de 800 presos políticos y comunes al sargento Cárdenas, pero nadie lo delató. Tuvieron a todos los presos del penal tendidos boca abajo durante horas, el que se movía era golpeado o los Infantes caminaban sobre él. En el allanamiento no encontraron nada, pero robaron muchas cosas.

Dicen que aproximadamente en noviembre de 1973, comenzó a circular en la cárcel el rumor sobre “la pascua roja”, según el cual rescatarían a los presos políticos, lo que creó incertidumbre, expectativas remotas pero también incredulidad. Sólo en la actualidad, el demandante se dio cuenta que el rumor de la pascua roja, fue para crear las condiciones que justificaran sacarlos de la cárcel y enviarlos al campo de concentración Melinka. Pocos días después, todos los marinos detenidos fueron trasladados en camiones, en muy malas condiciones, hasta el Campo de Melinka, ubicado en el cerro La Campana en Colliguay. El día del traslado los subieron a los camiones con las manos amarradas en la espalda, unos detrás de otros, con las piernas abiertas en forma de V. No podían ver nada porque los camiones estaban totalmente sellados. Tras casi una hora de trayecto, comenzaron a subir un cerro por unos quince minutos, luego de ello los camiones se detuvieron y comenzó una intensa balacera.

Cuando llegaron a Melinka, ya había otros presos políticos habitando el campo. El trato de los guardias con los detenidos era de “extrema prepotencia”, debían tratarlos de “señores”, ya que “ellos eran los salvadores del país y nosotros los traidores”. Todos los guardias eran de la infantería de marina. Existieron innumerables malos tratos, uno de los guardias siempre usaba un látigo para castigar a los presos políticos, otros de los malos tratos sucedían cuando los encerraban en las mediaguas al atardecer y aquellos que habían cometido faltas eran sacados a los “picaderos”, los hacían correr hasta el agotamiento y los perseguía el guardia con el látigo. Cuando terminaba “la carrera”, empujaban a la víctima a un pozo céntrico que tenía 3 metros de diámetro y 2 metros de profundidad, donde se acumulaban todos los desperdicios de la comida y el agua sucia. Después la



Foja: 1

victima de turno volvía a la mediagua donde residía “chorreando” el contenido del pozo.

Añaden que uno de los Infantes de marina que conocía al cabo Jara le contó el adiestramiento que les habían hecho antes de enviarlos al Campamento de Melinka. Según el infante de marina, les habían dicho que cada extremista que había en el campo había matado por lo menos a 25 personas, por lo que ellos también llegaban aterrorizados a Melinka y a veces actuaban con crueldad porque estaban asustados de la peligrosidad de “los extremistas”.

Relatan los apoderados que según el actor, tras el golpe de estado y mientras estuvieron presos, vivían el día, porque no sabían “si verían el día siguiente”. En todos los recintos de reclusión vivían con incertidumbre, se repetían las amenazas, rumores de que serían asesinados. Una vez el pastor Alberto Igartiguru les contó que tenía información de “altas esferas” acerca de su situación y que se había realizado una reunión de almirantes para decidir la eliminación física de los marinos detenidos y que 6 almirantes se habían opuesto. En el Campamento de Melinka eran rutinarias las balaceras nocturnas, apagaban todas las luces del campo y hacían sonar las sirenas, según los guardias estaban repeliendo ataques de extremistas que querían rescatar a los presos. Un día un cabo le informó que la noche anterior se había producido un intento de rescate, que habían repelido y muerto cinco extremistas.

En ese lugar nunca tuvo visitas de familiares.

Durante su estadía en Melinka, los marinos detenidos en la Escuela de Ingeniera fueron trasladados a la Academia de Guerra Naval, ya que debían ser interrogados y notificados de su condena. En la Academia de Guerra Naval permanecieron detenidos junto a unos doscientos presos políticos, recluidos en dos piezas. El piso estaba cubierto de colchonetas, escuchaban los gritos desgarradores de presos políticos que estaban siendo torturados en ese recinto durante el día y la noche. Para los presos políticos, la situación era de mucho temor, algunos eran presas del terror pues los llevaban todos los días a interrogatorios y torturas, volvían hechos “una miseria humana”, con el cuerpo morado.

Pese a que el actor no fue interrogado, lo que le dio cierta tranquilidad y le permitía tratar de dar un poco de aliento a los presos que estaban siendo torturados, de todas maneras, fue una experiencia horrible. Algunos días después fue trasladado nuevamente a Melinka, sin haber sido interrogado ni notificado de su condena.

Cuando los llevaron a Melinka, el actor recuerda que un día vio pastar animales fuera del campo, y pensó que tenía menos derechos que esos animales, que si quería sobrevivir en el campo de concentración, tenía



Foja: 1

que convertirme en un ser sin sentimientos, sin emociones, donde nada importara, tenía que olvidar el amor que tenía por su esposa, sus hijos, su madre y sus hermanos, sino todo eso lo iba a aniquilar, tenía que sobrevivir. Relata que en cabeza dejó de tener ataduras de cualquier especie, comenzó a vivir el día a día, sin pensar en nada más.

Tras un tiempo en el campo de Melinka, el jefe del Campo, Teniente González (oficial de mar), formó a todos los presos políticos y les dijo necesitar voluntarios para construir otro campo en Puchuncaví y que todos los voluntarios (una vez construido dicho campo) quedarán automáticamente en libertad, lo que no ocurrió. Relatan que después de varias semanas desde que habían partido los voluntarios a construir el nuevo campo, de improviso fueron trasladados todos los marinos a Puchuncaví, en el otoño de 1974. El campo todavía no estaba terminado y fueron obligados a trabajar en la construcción de la alambrada interior y los postes que sostenían el alambrado, además debieron construir los comedores que se requerirían para todos los presos políticos.

Relata que estuvo recluido en el campo de concentración de Puchuncaví sin derecho a nada, que su trato era inhumano, totalmente incomunicado de su familia y el mundo que lo rodeaba, ya que las visitas eran un lujo impensable para los recursos económicos con los que vivía su familia. En ese tiempo, llegar a Puchuncaví era muy difícil.

Finalmente fue condenado por la Fiscalía Naval a 3 años y 1 día, en la Causa 3941, pero nunca fue notificado de la sentencia. Por ello, aproximadamente a mediados de 1975, fueron enviados a la Cárcel Pública de Valparaíso nuevamente. A principios de junio de 1976 fue enviado al centro de detención Capuchinos y luego expulsado del país con prohibición de retorno, la que, según recuerda, le fue levantada tras la visita a Chile del Papa Juan Pablo II, en 1987. Es decir, el actor fue expulsado de Chile el 6 de julio de 1976, después de 3 años como prisionero, en siete recintos de reclusión distintos, incluido dos campos de concentración. En el aeropuerto lo esperaba su cónyuge y sus 4 hijos, que los acompañaron en el exilio. Durante los tres años que permaneció detenido, su esposa y sus hijos habían vivido en situación de mucha pobreza, pues habían perdido todo lo que tenían.

Cuando salió de Chile sintió que volvía a vivir, ya que estaba junto a sus seres queridos, feliz de que su odisea hubiese terminado, pero al mismo tiempo estaba traumatizado, ya que su propio país le “había dado vuelta la espalda”. Por mucho tiempo llevó consigo un profundo rechazo hacia todo aquel que vistiera un uniforme, porque veía en cada uno de ellos un potencial torturador. No quería saber nada de Chile, lo que permaneció en su mente 30 años, hasta que un día su mujer le dijo que no podía albergar tanto odio en su corazón. Después de pensar por largo tiempo acerca del



Foja: 1

comentario de su cónyuge, decidió visitar con ella a sus familiares en Chile y visitó Chile el año 2008, 32 años después de su expulsión.

En cuanto al cuarto demandante, don **Sergio Jacinto Villar Veloso**, reconocido en el Informe Valech con el N° 26.515, señalan que cursó estudios en la Escuela de Ingeniería Naval, ubicada en el Sector de Las Salinas de la ciudad de Viña del Mar, entre los años 1969 y 1971. Su formación académica transcurrió normalmente, sin embargo, los últimos meses de 1971, se percató de que a menudo las clases se interrumpían para hacer ejercicios militares tendientes a disolver o disuadir desórdenes públicos, episodios que se repetían con mucha frecuencia. En una oportunidad le consultó a un compañero si sabía algo al respecto y él le respondió señalándole que tenía la impresión de que la Marina quería adelantarse a los hechos y que habría un golpe militar. Ya el año 1971, se hacía manifiesta una actitud pro golpe de Estado en la Armado; era habitual que oficiales quisieran saber la postura de la tropa frente al gobierno de la Unidad Popular y se percibía este ambiente enrarecido al interior de la institución.

Al terminar sus cursos de ingeniería en refrigeración, regresó a Asmar en Talcahuano, específicamente al Taller 51 de Electricidad, donde trabajó en forma normal hasta el año 1973, pero en el mes de agosto de ese año se generaron las primeras señales de movimiento de marinos y uniformados dentro de la Base Naval, hasta que el día 8 de agosto de 1973, llegaron oficiales y personal de tropa. Alrededor de las cuatro de la tarde, el jefe del Taller, Teniente Nahuel, citó al demandante a su oficina para comunicarle verbalmente que era un sospechoso de rebeldía y que desde ese momento quedaba detenido. Allí debió esperar hasta que otros uniformados lo fueron a buscar, pero mientras esperaba, percibió que otro grupo de oficiales se dirigió a una parte distinta del Taller y ahí detuvieron a su compañero Víctor Reiman.

El grupo de uniformados que arrestó al Sr. Villar Veloso le informó que era “sospechoso” y, por tanto, debía obedecer sus órdenes y no tenía derecho a hablar. Fue llevado caminando desde el denominado “Taller 51” hasta las puertas de la Administración de ASMAR donde abordó un vehículo que lo trasladó con destino desconocido, con los ojos vendados y maniatado de manos, percibiendo que aparentemente, se trasladaba a más personas, pero fue forzado a no hablar durante el trayecto, el que duró aproximadamente 15 o 20 minutos. Luego del arribo, se percató que lo habían trasladado al Fuerte Borgoño, fue separado del grupo y lo llevaron a una sala donde había dos marineros, quienes primeramente le dijeron “aquí, mandamos nosotros”, le hicieron sacarse la camisa y lo golpearon reiteradamente en el pecho y en la espalda, con golpes de puño y con la culata de un arma. No recuerda cuanto tiempo duró esta golpiza. Luego le



Foja: 1

sacaron toda la ropa, dándole fuertes “jalones” y “tirones” hasta dejarlo en ropa interior. Cuando ya estaba desnudo y golpeado, fue agarrado del cabello y le aplicaron la tortura denominada “el submarino”, que consistía en que le sumergían la cabeza hasta el torso en un estanque o barril de agua, durante un tiempo que se hacía interminable, provocándole asfixia. Luego le sacaban la cabeza del agua, sólo para repetir una pregunta y lo volvían a sumergir. Le preguntaban si sabía de la presencia de más adherentes “comunistas” en las tropas y como el Sr. Villar no respondía, lo golpeaban nuevamente. En un momento les dijo: "yo no sé, yo no sé de qué me están hablando..." pero continuó la golpiza, en medio de insultos y garabatos, continuando este proceso en una especie de turnos. Debido a ello perdió la noción del tiempo, pese a que escuchaba a lo lejos distintos gritos masculinos. Después fue llevado a otro lugar, donde recuerda que otras personas estaban en el mismo espacio, pero en otras subdivisiones, no los veía, sólo podía divisar a dos torturadores. Luego de dejarlo descansar, lo tomaron nuevamente y reanudaron la tortura, varias veces, y sólo cuando ya había transcurrido mucho tiempo y no logrando obtener información de su parte, fue recluido en una celda.

Recuerda que tenía mucho frío, porque aún estaba desnudo. Después de algunas horas, le lanzaron la ropa al interior de la celda y le ordenan que se vista, mediante garabatos e insultos. Luego lo llevan a un vehículo para trasladarlo con destino desconocido nuevamente. Ya había pasado uno o dos días desde su arresto. Lo llevaron al Gimnasio Naval, escoltado por otros marinos y conducido a las dependencias interiores, donde había otras personas detenidas, dándose cuenta de que había muchas personas pertenecientes a diversos talleres o áreas de la Base Naval. Logró encontrar a algunos colegas conocidos, entre ellos, Víctor Reiman, Ramón González y Tomás Matus, todos habían vivido una experiencia similar de tortura. Durmieron en las graderías del gimnasio y recibieron comida. Don Sergio no había recibido alimentos desde su detención.

Transcurrieron muchos días, pese a que su noción del mismo era complicada; así, aproximadamente el 4 de septiembre, todas las personas que estaban en el gimnasio fueron subidas a un transporte de gran capacidad y les informaron que serían llevados a la cárcel. En el camino se detuvieron en el Cuartel Rodríguez de la Base Naval para recoger a más personas, ya que todos serían conducidos a la Cárcel de Concepción, donde llegaron al mediodía. Fueron obligados de descender, a la espera de que el marino encargado del transporte se entrevistara con el Alcaide de la cárcel. Ya recibidos por personal de Gendarmería, los hicieron esperar en un espacio provisorio, para luego derivarlos a dos celdas grupales, las que tenían lo que él denomina como “hamacas” individuales y separados del resto de la población penal. En ese recinto permaneció detenido hasta el 23



Foja: 1

de agosto de 1976, recibiendo constantes amedrentamientos, que se agravaron tras el golpe de Estado.

En el contexto familiar, al momento de su arresto, el Sr. Villar Veloso vivía hacía algunos meses en Sector Barrio Norte de Concepción con su esposa (sic), con un embarazo avanzado de su primera hija. Durante el periodo de encarcelamiento, estaban autorizados para recibir visitas tres días a la semana por lo que pudo reencontrarse con ella, su padre, sus hermanas y algunos amigos. En abril del año 1974, la relación con su familia de origen se dañó, debido a malentendidos con su cónyuge, en los cuales no intercedió porque estaba prisioneros y obviamente no pudo resolver oportunamente. Desde ese momento, sólo mantenía contacto con su padre, quién lo visitaba una vez a la semana. Se distanció de sus hermanas y ellas sufrían por esa situación, pero el estar encarcelado le impedía razonar y reencontrarse con ellas. Señalan que para don Sergio Villar Veloso la prisión fue un episodio que marcó su vida profundamente y que “el desgaste y el estado de vulnerabilidad sufrido me impidieron, por mucho tiempo, actuar con claridad para recuperar mis vínculos familiares”.

Durante esos tres años, sabía lo que sucedía en el país por los relatos de las visitas que recibía y de lo que le compartían sus compañeros de celda. Salió de la cárcel el 23 de agosto de 1976 y volvió a residir en la casa que arrendaba en Barrio Norte.

Durante su periodo de encarcelamiento, su cónyuge e hija habían vivido de los aportes del padre del demandante y de sus familiares directos, pero al recuperar la libertad, tanto su hija de tres años como su esposa necesitaban que él generara ingresos económicos para sobrevivir, por lo que obviamente buscó trabajo. Su reinserción laboral fue difícil, sólo logró algunos cargos como vendedor, pero a las pocas semanas de desempeño, sorprendentemente era despedido sin justificación razonable. Agregan que el Sr. Villar se sentía discriminado, incluso logró percibir que estaba bajo seguimiento porque en ocasiones descubrió a personas de comportamiento sospechoso que lo observaban a la salida del trabajo. Estos seguimientos lo obligaron a limitar las visitas a su padre, para evitar involucrarlo en algún hecho de persecución posterior. A veces, cuando estaba suficientemente seguro de que nadie extraño estaba a su alrededor, generalmente en la noche, subía a un bus y se arriesgaba a visitar a su padre. Fue un periodo de intenso desgaste emocional.

La inestabilidad laboral, la necesaria desvinculación de su red de apoyo para protegerlos, la discriminación asociada a su destitución de la Armada y la condena por el delito de sedición, lo impulsaron a adoptar la decisión de aceptar el exilio. Viajó a Santiago y solicitó información en la Vicaría de la Solidaridad, donde le informaron que cinco países europeos estaban dispuestos a recibir a refugiados políticos. De las alternativas,



Foja: 1

escogió Suecia. Ya había resuelto que su vida no continuaría en su país, pese al dolor. Organizó el viaje sin pensar demasiado: su esposa y su hija se quedarían unas semanas y viajarían después, cuando él se hubiera establecido en algún domicilio en el nuevo país. Gestionó la documentación requerida y partió al exilio el 12 abril de 1977.

Relatan que durante los dos primeros años en Suecia, debió aprender el idioma sueco, para aspirar a acceder a trabajos que se relacionaran con su especialidad. En la medida que incrementaba su conocimiento del lenguaje, prestó ayuda a la policía sueca como traductor amateur, colaborando para que otros chilenos pudieran comunicarse y recibir información pertinente a su situación. Su vida en el exilio se desarrolló con esfuerzo. Con su mujer tuvieron dos hijos más, que obtuvieron la nacionalidad sueca y a los cuales se propuso formar en el idioma español y enseñarles algunas costumbres chilenas, como una forma de mantener vigente su origen. Transcurrieron los años y mantuvo comunicación esporádica con su padre mediante cartas que enviaba a Chile, hasta que falleció en el año 1986. Como Chile aún se mantenía bajo dictadura, don Sergio tenía impedido ingresar al país. Nunca más pudo ver a su padre en vida, desde el momento de su exilio, lo cual sumó otro dolor irreversible que lo acompaña hasta la fecha. Tuvo dificultades para mantener su relación matrimonial y el vínculo con los hijos, su comportamiento se tornó adusto y desapegado. Cree que no fue plenamente consciente de sus episodios depresivos, los que recién pudo visualizar cuando retornó a Chile. Actualmente está divorciado y el contacto con sus hijos es escaso e indiferente, como resultado de lo complejo que fue sobrevivir en el desarraigo, tras los años de prisión, con la carga emocional que genera la privación del contacto con los seres queridos y la distancia de la familia extendida que formó parte de su vida, así como la ruptura de su proyecto de vida como integrante de la Armada.

Por último y en lo que respecta al demandante don **Víctor Manuel Reiman Campos**, reconocido en el Informe Valech con el N° 20.155, en el año 1973 era Operario tercero de la Armada de Chile y fue detenido el 9 de agosto de 1973, en los Astilleros de ASMAR en Talcahuano. Después de almuerzo, regresaba al taller y supo que dos personas lo buscaban incesantemente, el secretario del taller de apellido Roa y su jefe, que era un civil de apellido Nahuel, quienes le informaron que su jefe militar, de apellido Valenzuela, lo necesitaba urgente en su oficina, lugar al que llegó y éste último comenzó a hacerle preguntas, como por ejemplo, si pertenecía a alguna organización política comunista, a lo que él respondió que no. Luego llamó a algún lugar y le comunicó que estaba detenido, sin indicarle los motivos de ello, encerrándolo en la oficina.



Foja: 1

Alrededor de 20 minutos más tarde, llegó un camión, dos jeeps (que transportaban infantes de marina con tenidas de combate, fuertemente armados) y un furgón de color plomo, al que fue subido con rumbo desconocido, para después ser ingresado al Fuerte Borgoño.

Al producirse la detención, durante el traslado y su llegada al Fuerte Borgoño, nadie se identificó, salvo su jefe militar Teniente Primero Valenzuela. Testigo de su detención fue don Sergio Villar Veloso, pero entre los aprehensores había oficiales y miembros de la tropa, a quienes no pudo identificar, quienes iban con camuflaje.

En el Fuerte Borgoño, don Víctor fue entregado directamente a los Infantes de marina, obligado a desnudarse y luego lo golpearon, obligándolo a ingresar en una laguna, con el frío del invierno –hecho que reiteraron en varias ocasiones, con o sin ropa, y cuando intentaba salir, recibía golpes de puños, culatazos y puntapiés-, sin que pudiera distinguir la identidad de los autores de estos vejámenes; en dicho lugar fue mantenido prisionero hasta el 11 de agosto. Relatan que el Cuartel Borgoño era un recinto similar a un campo, aunque con oficinas, tenía dos galpones amplios, en uno fue torturado, al igual que otros compañeros marinos que se encontraban en el recinto y en el otro los hacían descansar.

Refieren que durante las torturas a las que fue sometido, don Víctor Reiman Campos recuerda a un capitán de apellido Kohler que lo torturó, además de algunos tenientes, uno de apellido Luna y algunos cabos o sargentos. Permaneció detenido con Silverio Lagos, Oscar Estay, Sergio Villar, Tomás Matus y otros compañeros.

El primer día lo sacaron de la laguna y lo llevaron a un galpón grande, donde estaban presentes varios Infantes de marina con diferentes grados, entre ellos el Capitán apellido Kohler, quién dirigía el grupo. Varios de ellos lo sometieron a la fuerza amarrándole los pies y manos con un cordel, luego este cordel fue pasado por una roldana, colgada de una viga ubicada aproximadamente a tres metros de altura, de esta manera “lo colgaban”. También fue sumergido varias veces en un tambor con agua sucia e incluso restos de petróleo, cuando lo acaban, lo golpeaban con las culatas de las armas y las manos, lo que le dañó el tímpano de su oído derecho. Durante el desarrollo de esas torturas le preguntaban si pertenecía a algún partido político, si era verdad que se iban a “tomar la escuadra” de la Armada y si también era verdad que iban a matar a todos los oficiales que se opusieran a la toma de la escuadra, preguntas que le fueron repetidas en las diferentes sesiones de tortura. Le preguntaron también por todos los miembros de su familia y si alguno de ellos estaba afiliado a algún partido del gobierno de esa época.



Foja: 1

Expresan que las sesiones de inmersión en el tambor con agua sucia del primer día duraron muchas horas, hasta que tarde en la noche cayó en manos de dos torturadores que ejercían el rol del “bueno y el malo”. Uno le ofrecía café y cigarrillos y el otro se los quitaba o simplemente los tiraba a la basura. Lo amenazaron con quemarle el pecho, pero no lo hicieron.

Durante su detención en el Cuartel Borgoño se negó al Sr. Reiman atención médica en el Hospital Naval de Talcahuano, a pesar de sus reiteradas peticiones, por los fuertes dolores y permanentes molestias producidas por los golpes recibidos en los oídos. Un cabo Infante de Marina de apellidos Parra Infante, apodado “Parrita”, lo acompañó posteriormente al Hospital Naval. Lo llevó amarrado y lo golpeó reiteradamente cada vez que don Víctor hacía algún movimiento que él consideraba inadecuado. El Doctor que lo atendió constató que no tenía daños en el oído, lo limpió y lo diagnosticó de manera errónea, señalando que sólo tenía agua retenida en el oído. Posteriormente el actor supo que el daño provocado en su tímpano derecho es irreversible.

Explican que mientras permaneció en el Fuerte Borgoño, al igual que los otros detenidos, rara vez podía dormir, lo que se repitió posteriormente cuando los tuvieron detenidos en los camarines del Estadio de la Base naval, los despertaban a media noche y las comidas llegaban a cualquier hora. En los camarines de la Base Naval las ventanas habían sido cubiertas de tal manera que se perdía la noción del tiempo, día y noche eran iguales. En resumen, después de haber sido torturado en el fuerte Borgoño, fue trasladado a los camarines del Estadio de la Base Naval, no recuerda cuantos días estuvo allí, para posteriormente, ser trasladado al gimnasio de la Isla Quiriquina y luego al Cuartel Rodríguez de la Armada.

Explican que estando en la Isla Quiriquina, lo fue a buscar un Capitán de apellido Henríquez, acompañado de varios marinos con tenida de combate y lo subieron a un yate, encontrándose amarrado. El Capitán Henríquez lo interrogó en reiteradas ocasiones, ya que quería saber si era verdad que tenían intenciones de “matar a los oficiales”, en el supuesto que se tomaran la Escuadra, a los cual le respondió que no tenía idea. Se le habló de una lista encontrada en su guardapolvo, que contenía una lista de nombres, entre ellos el suyo (Henríquez), su jefe de Taller (Teniente Valenzuela) y su antiguo jefe Capitán Bull; esa lista había sido recibida por el Sr. Reiman Campos, ya que contenía los nombres de algunas personas que pertenecían al Servicio de Inteligencia Naval (SIN), hecho que olvidó y no la destruyó, lo que le costó tortura y muchos interrogatorios.

Estando en el yate varias veces intentaron tirarlo al agua para que se ahogara, según ellos le dijeron. Esto se extendió como hasta las dos de la tarde, para luego trasladarlo a la sede de la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval y lo pusieron mirando hacia una muralla hasta



Foja: 1

pasadas las 17 o 18 horas. Durante esas horas pasaron diferentes interrogadores, quienes lo golpeaban a puñetazos y culatazos y le preguntaban “si iba a decir la verdad”.

Agregan que además el Sr. Reiman Campos fue interrogado por el Fiscal Naval don Fernando Jiménez Larraín, quien lo amenazó en reiteradas ocasiones con enviarlo nuevamente de regreso al Fuerte Borgoño, ya que según él, don Víctor estaba mintiendo. Lo mismo le ocurrió en una ocasión, cuando se apersonó en el Cuartel Rodríguez su antiguo jefe de taller, el Capitán Bull, quien fue a interrogarlo por la lista que le habían encontrado en su guardapolvo, con las mismas preguntas que otros ya le habían hecho. El Capitán Bull también lo amenazó con enviarlo al Fuerte Borgoño, pero el demandante insistió en su inocencia.

Relatan que posteriormente fue trasladado a la Cárcel de Concepción, ubicada en calle Chacabuco N° 70, donde vivió el golpe de Estado. El día 21 de octubre de 1973, a mediodía, cambiaron de celdas a todos los marinos detenidos y llevaron a sus celdas a cuatro militantes comunistas: Vladimir Araneda, Isidoro Carrillo, Bernabé Cabrera y Danilo González, de quienes se corría la voz de que serían fusilados.

Agregan que el 22 de octubre, alrededor de las 1 o 2 de la madrugada, llegó un contingente de militares a sus celdas, fueron despertados a culatazos y puntapiés. Empezaron a leer nombres y apellidos y ellos no respondieron, ya que los nombrados no estaban en el grupo de marinos detenidos. En esa oportunidad escuchó decir: “a estos los vamos a fusilar pronto”. A las seis de la mañana aproximadamente, salió un grupo de gendarmes guiando a los cuatro comunistas detenidos, quienes fueron fusilados más tarde en el predio de prisiones denominado “El Manzano”. La persona que presumiblemente dirigió el pelotón de fusilamiento fue un teniente de prisiones de apellido de La Fuente, apodado “el Cabeza de Buey”, el que días después profirió el siguiente comentario: “A los marinos los vamos a fusilar la próxima semana...”.

Detalla que don Víctor Reiman fue liberado el 26 de agosto de 1976, después de haber sido condenado a 3 años y un día por el delito de Sedición o Motín. Ya había cumplido 3 años y 15 días encarcelado. La sentencia le fue leída en la Fiscalía Naval de Talcahuano

Como secuela de las torturas sufridas, perdió la audición en el oído derecho, lo que fue documentado para la Comisión Valech. También sufrió profundas secuelas psicológicas imposibles de enumerar. Especialmente recuerda lo difíciles que fueron sus primeros años en libertad.

Bajo el título “Daño Producido”, sostienen que sin perjuicio de que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes han sido descritos para cada paso particular, y como consecuencia directa de ellas sus



Foja: 1

representados sufrieron un grave y serio perjuicio, tanto psíquico como físico, provocado por agentes del Estado, durante los días previos y posteriores al golpe de Estado, los que han sido permanentes en el tiempo; aunque han transcurrido más de 40 años de los hechos, los demandantes continúan con secuelas derivadas de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fueron sometidos; además, perdieron su puesto y grado en la Armada, a la que pertenecían desde muy jóvenes, por lo que su formación en esa institución era parte de su identidad, fueron tratados como “prisioneros de guerra”, encarcelados en campos de concentración, obligados a realizar trabajos forzados y la mayoría obligados -directa o indirectamente- a abandonar el país, sin poder retornar durante muchos años, alejándose de sus familias y amigos, además que en este caso en particular, estamos además frente a los delitos cometidos por sus propios compañeros de armas.

Citando a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura señala que: “Lo cierto es que la mayoría de las víctimas que prestaron testimonio ante esta Comisión fueron expuestas a situaciones límites que erosionaron soportes de sus vidas y dislocaron sus proyectos”; añadiendo que la tortura ha sido conceptualizada como una experiencia traumática que provoca consecuencias sistémicas. No es solamente una modalidad compleja de agresión, crueldad y denigración. Sus efectos desquiciantes se agravan precisamente porque son agentes del Estado o personas a su servicio quienes dañan en nombre de la patria. Dadas estas características, se puede afirmar que las condiciones de prisión política y tortura descritas en este Informe violaron los derechos de las personas, causándoles daños emocionales, morales y materiales...”, los que son precisamente los que por esta demanda piden sean indemnizados.

Indican que los daños tanto físicos como psíquicos, son distintos de persona en persona, sin embargo, todos tienen en común el daño moral; y que en este caso el daño causado es obvio, público, notorio, y no hay quien pueda negarlo caprichosamente. Se trata de dolores y traumas humanos que no hacen distinción para alojarse en el alma de quien los padece, atendiendo a condiciones sociales, políticas, culturales o religiosas. Luego cita jurisprudencia atinente al caso, destacando “el daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza de la psicología afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre que un hecho afecta la integridad física o moral de un individuo... “(Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LVIII, Segunda Parte, sección cuarta, pág. 374). En el mismo sentido la Corte Suprema ha expresado que “El daño moral entendido como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto afecta la integridad psíquica del individuo y que se traduce en el agobio que genera el haber sufrido una lesión considerable y el riesgo para su vida que ello representó,



Foja: 1

no requiere de prueba, las consecuencias que nacen de su propia naturaleza son obvias y lógicas, que no pueden desconocerse en ningún procedimiento aunque se aprecie la prueba en forma legal, pues el mínimo razonamiento, criterio o principio lógico, demuestra que una lesión tan considerable necesaria e indefectiblemente conlleva una aflicción psíquica. Ahora bien, su valuación debe hacerse conforme a la prueba tasada o legal y a la apreciación prudencial del sentenciador, lo que es distinto a la afirmación de que el daño moral requiere prueba. La dimensión del daño moral se obtiene indudablemente y sin lugar a discusión, de las pruebas consideradas por la juez a quo en la sentencia, de esta forma, necesariamente el actor debe ser indemnizado, pues el artículo 2314 del Código Civil no distingue clases o tipo de daños”. (CORTE SUPREMA, Rol: 5946-2009).

En razón de los hechos descritos, demandan al Fisco de Chile, por daño moral, como consecuencia directa de los secuestros, torturas y trato inhumano y degradante de que fueron objeto los actores, al pago de doscientos millones de pesos (\$200.000.000), para cada uno de ellos, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o en su defecto el monto indemnizatorio que estime el tribunal.

Bajo el acápite “El Derecho” explican que de los hechos criminales narrados, es civilmente el Estado de Chile, ya que a quien se acusa de su autoría eran miembros activos de la Armada de Chile, así como de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública. Agrega que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos, destacando el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, conocido como “Informe Valech”; y que si bien los demandantes fueron en su gran mayoría detenidos con anterioridad al golpe de Estado, fueron reconocidos como víctimas por el Informe Valech, que conoció de casos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, ya que la tortura, malos tratos y prisión política a las que fueron sometidos no sólo se produjo al momento de su detención, sino por mucho tiempo, atravesando la barrera del 11 de septiembre de 1973, fecha en la cual se endurecen los malos tratos en su contra.

Indican que la responsabilidad del Estado por el daño moral ocasionado a los actores emana en primer lugar del principio general del derecho administrativo que lo obliga a responder por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas no obligadas a



Foja: 1

soportarlos; y también del derecho internacional de los derechos humanos, vigente a la época de comisión de los actos denunciados.

Explayándose sobre el asunto, explican que la responsabilidad del Estado, consagrada en las Actas Constitucionales números 2 y 3 y, en la actualidad, en la Constitución de 1980, reconoce claros antecedentes en la Constitución Política de 1925, vigente a la época de estos actos ilícitos. La doctrina iuspubblicista ha sostenido que existe un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos. En este sentido el profesor Eduardo Soto Kloss enseña: “dicho principio general de responsabilidad del Estado emana de que el Estado chileno es una República, lo que implica que todos los sujetos tanto públicos como privados deben responder de sus actos y omisiones por encontrarse insertos en un Estado de Derecho. Esto tiene como consecuencia directa que cualquier sujeto que se sienta agraviado o lesionado por actos de los órganos públicos puede demandar a los tribunales de justicia el resarcimiento de los perjuicios conforme al estado de derecho democrático. Lo dicho por la doctrina se fundamenta en el principio de igualdad que plasmaba ya el artículo 10 N° 1 de la Constitución de 1925, pues es inconstitucional que un sujeto de derecho sea lesionado y perjudicado sin ser indemnizado en relación a otros sujetos a los cuales no les afectan los actos u omisiones ilícitos del órgano estatal. La consagración del gobierno republicano y democrático se plasma de manera explícita en el artículo 1° de la Constitución de 1925 que señala: "El Estado de Chile es unitario. Su gobierno es republicano y democrático representativo".

Agregan que los otros preceptos que sustentan el principio general de responsabilidad del Estado, a la luz de la Constitución de 1925, son los artículos 4, 10 N° 1 y 10 N° 9. El primero de ellos, fuente directa de los actuales artículos 6 y 7 de la Constitución de 1980, establecía la obligatoriedad de los órganos del Estado de ceñirse a las prerrogativas y facultades que les entregaba la ley y los actos que excedieran sus atribuciones adolecían de nulidad. Si bien no se agregaba que dichos actos nulos originaban las responsabilidades que la ley señale, no puede entenderse de otra forma, pues sabido es que la nulidad de los actos conlleva siempre y en todo caso la indemnización de los perjuicios causados a resultas de la nulidad. En cuanto a lo preceptuado por el actual artículo 6 de la Constitución de 1980 que posee su fuente en el artículo 4 citado, existe meridiana claridad de que los órganos del Estado siempre deben sujetar su actuar a la preceptiva constitucional y a las leyes, pues si fuera otra la interpretación no se entendería el principio de supremacía constitucional.



Foja: 1

Añaden que el principio general de responsabilidad del Estado por sus actos y omisiones, entonces, se basa en los artículos 1, 2, 4 de la Constitución política de 1925 y se concreta en el artículo 10 N° 10 y N° 9 de la misma Constitución. En cuanto al primer precepto, el artículo 10 N° 10 de la Constitución de 1925, explicitaba que todo daño fruto del actuar de algún órgano del Estado, como lo es la Armada de Chile, constituye un desmejoramiento de la esfera patrimonial de los sujetos afectados y genera el derecho a exigir la responsabilidad del Estado, pues nos encontramos ante una lesión del derecho de propiedad, ya que los actores fueron privados de bienes que forman parte de la esfera de su personalidad y, según prescribe la norma constitucional, “nadie puede ser privado de la de su dominio, ni de una parte de ella, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial o de expropiación por razón de utilidad pública, calificada por una ley”. Pues bien, ninguna de las hipótesis descritas se verificó y, sin embargo, de igual manera se les privó de bienes personalísimos al atentar contra la esfera subjetiva e infringirles el daño moral indicado.

Por su parte, el artículo 10 N° 9 de la Constitución de 1925, fuente directa del artículo 19 N° 20 de la Constitución de 1980, aseguraba el principio de la igual repartición de las cargas públicas, que obligaba a indemnizar a todo aquel que infringe un daño, ya que dicho daño producido antijurídicamente, implica una ruptura de la igual repartición de las cargas públicas, derecho que la Constitución aseguraba y amparaba frente a sus violaciones, y en especial a aquellas cometidas por los órganos públicos. Este detrimento en la esfera de los afectos que han sufrido los demandantes, infringió la igual repartición de las cargas públicas al exponerlos, a diferencia de otras personas, a sufrimientos inhumanos y degradantes. La actuación de la Armada de Chile, órgano del Estado, constituye un desigual tratamiento que infringe el artículo 10 N° 1 y 10 de la Constitución de 1925.

En el sub título “Responsabilidad en el Derecho Administrativo actual”, refieren que es necesario revisar la responsabilidad del Estado en el marco de la legislación actualmente vigente, atendido el principio de vigencia in actum de normas ius publicistas del Derecho Administrativo. En ese sentido, indican que el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República dispone que “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.”

Indica que en esta disposición constitucional se establece un mecanismo de reparación de los daños producidos por la Administración a los particulares, sistema que se caracteriza fundamentalmente por ser de



Foja: 1

carácter directo, es decir, la acción de reparación del particular afectado se hace efectiva en el patrimonio Fiscal cuando los organismos, como en el caso de autos, actúan bajo la personalidad jurídica del Estado. Posteriormente cita las disposiciones de los artículos 4 y 44 de la Ley N° 18.575 y jurisprudencia.

Bajo el párrafo “Concurrencia de los requisitos para indemnizar en el caso de autos”, indica que ellos se configuran en los hechos descritos: 1) Existe un daño moral, y los demandantes fueron reconocidos por el propio estado como víctimas de violación de sus derechos humanos en los informes de prisión política y tortura; 2) La acción u omisión emanó de un órgano del Estado, pues agentes del mismo torturaron y encarcelaron a los actores, sin que haya demostrado la sujeción a un debido proceso. El hecho que causó daño fue ejecutado por el Estado de Chile, puesto que fueron órganos de su administración, especialmente la Armada de Chile, que actuó en contra de los demandantes, y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal; 3) Existe un nexo causal, pues el daño a las víctimas emana, justamente, de la perpetración del delito civil; y 4) no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad.

Posteriormente en cuanto a la procedencia de la indemnización del daño moral, indica que la responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse y todo daño causado a un particular y, para una correcta interpretación de estas disposiciones que dejan un claro vacío las normas de derecho administrativo indicadas, es necesario acudir al derecho común. En este –explica- el artículo 2329 del Código Civil comprende todo daño, el que incluye el de carácter moral y su procedencia está reconocida en forma unánime por la doctrina y la jurisprudencia. Agregan que igualmente se ha dicho por nuestros tribunales que los daños morales provocados a los parientes más próximos no necesitan de prueba, presumiéndose el perjuicio por la muerte de su pariente. Así, se ha fallado que “el daño moral es una materia discrecional y de apreciación privativa de los jueces de instancia; para dar por establecida su existencia basta con que el juez estime acreditada la causa que lo genera y el nexo de parentesco o relación de quien lo impetra. En consecuencia, en el cuasidelito de homicidio sólo es necesario tener por probada la muerte de la víctima por la acción de quien la produce y el parentesco de la víctima con los que reclaman” (Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXVII. Segunda Parte, Sección Cuarta, pág. 6).

Fluye de lo señalado que el Estado de Chile debe responder por el perjuicio que han ocasionado funcionarios del Ejército de Chile actuando en su calidad de tal, puesto que se dan todos los supuestos necesarios para determinar el perjuicio moral sufrido por nuestros mandantes.



Foja: 1

Seguidamente se refiere a la imprescriptibilidad de la acción, pues las normas en materia de prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos no resultan aplicable a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que en tal caso también existen las normas de derecho público que rigen la responsabilidad del Estado como son los preceptos citados de la Constitución de 1925 y la Constitución de 1980, lo que ha sido recogido por la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores.

Finalmente se refiere a los fundamentos del derecho internacional que obligan al Estado a indemnizar, citando primeramente doctrina respecto al bloque constitucional de los derechos fundamentales que integran el artículo 5 de la Constitución Política del Estado y las normas de derecho internacional, agregando que los hechos generadores de la responsabilidad que se demanda, tienen el carácter de violación a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, concurrente con la de secuestro agravado o torturas en el derecho interno; y por esta razón, la responsabilidad del Estado debe determinarse de conformidad con los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran normas de ius cogens y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de la norma estipulada en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, específicamente el artículo 27 que cita.

Indican que la en la Convención Americana de Derechos Humanos se establece no sólo la obligación de respeto de los derechos y libertades que ella señala, sino también los garantiza, y ello incluye el deber de reparar el derecho conculcado. Añaden que la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes también resulta aplicable al caso, pues los demandantes no sólo fueron víctimas de detenciones ilegales, secuestros, incomunicaciones, en algunos casos sometidos a Consejos de Guerra, juzgados por tribunales en tiempo de guerra, sino que además fueron víctimas de torturas, que constituye una de las prácticas más crueles e inhumanas que la comunidad internacional rechaza y ha intentado erradicar.

Resaltan que, además, las torturas infligidas a los demandantes, se realizaron como parte de un plan masivo y sistemático en contra de la población civil, la que había apoyado al gobierno depuesto, había formado parte de la izquierda política o se oponía activamente a la dictadura militar. Este actuar masivo y sistemático se acredita con los informes de verdad mencionados, los que son de público conocimiento; por lo tanto, las torturas sufridas por los actores constituyen crímenes de lesa humanidad, así como crímenes de guerra, por cuanto a partir del 11 de septiembre de 1973, todo el país se hallaba jurídicamente en estado de Guerra, misma fecha en que



Foja: 1

por medio del Decreto Ley N° 3, se declaró el Estado de Sitio en todo el territorio nacional, agregando que la Junta asumía “la calidad de General en Jefe de las Fuerzas que operará en la emergencia”. Luego el Decreto Ley N° 5, de 12 de septiembre de 1973, señaló que el Estado de Sitio debía entenderse como “Estado o tiempo de guerra”, para los efectos de la aplicación de la penalidad que establece el Código de Justicia Militar en tiempos de guerra, demás leyes penales “y, en general, para todos los demás efectos de dicha legislación”.

Con anterioridad al golpe de Estado en Chile, ya en el año 1968, Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad (26 de noviembre de 1968), que en su preámbulo señala que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional más graves, y que su represión efectiva “es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y seguridad internacional”.

Describen que el 16 de diciembre de 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 60/147, con los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. Los Principios dividen los derechos de la víctima en tres categorías: el derecho a saber, el derecho a la justicia, y el derecho a obtener reparación. El Principio N° 11 señala: “Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional: a) Acceso igual y efectivo a la justicia; b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación”.

Finaliza este acápite citando jurisprudencia.

Previas citas legales, pide tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, ya individualizado, pidiendo que se acoja en todas sus partes, declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por la prisión política y torturas a las que fueron sometidos, la suma de \$ 200.000.000 (doscientos millones de pesos) a cada uno de los demandantes (1) Juan Manuel Segovia Arrué; (2) Carlos Enrique González Mejías; (3) Carlos Vidal Alvarado González; (4) Sergio Jacinto Villar Veloso



Foja: 1

y (5) Víctor Manuel Reiman Campos, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito del proceso, con costas.

Con fecha 17 de julio del año 2019 según estampado receptorial de folio 5, se notificó personalmente la demanda a doña María Eugenia Manaud Tapia, en representación del Consejo de Defensa del Estado.

Con fecha 02 de agosto de 2019 a folio 6 a través de presentación ingresada por Oficina Judicial Virtual, comparece doña Ruth Israel López, abogada procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien contesta la demanda solicitando su total rechazo, conforme a los argumentos que expone.

Tras efectuar un resumen de la demanda, opone excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizados los demandantes. Indica que no resulta posible comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos sino se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional.

En efecto continúa, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior -y desde- lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada Justicia Transicional. Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

Agrega que, en efecto, el denominado dilema "justicia versus paz" es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema. Por otro lado, manifiesta que no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Mal que mal el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se



Foja: 1

exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.

Señala que estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ellas. Asevera que no debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Seguidamente, expone la complejidad reparatoria, citando a Lira, señalando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno de don Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron "(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados: y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse".

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación" entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas".

Refiere que en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, el ejecutivo, siguiendo aquel informe, entendió por reparación "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho informe". A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena en un "proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias



Foja: 1

más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Añade que, de esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación moral y patrimonial buscada por el proyecto. La noción de reparación por el dolor de las vidas perdidas es encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal de indemnización y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la responsabilidad extracontractual del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18. Asumida esta idea reparatoria, señala, la ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

En este sentido, indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Mediante estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones permitirá verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

Bajo el subtítulo “Reparación mediante transferencias directas de dinero”, afirma que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Destaca que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, algunos sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero, mientras otros, abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines resarcitorios.



Foja: 1

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de: a) Pensiones: la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig); b) pensiones: \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); c) Bonos: la suma de \$41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$ 22.205.934.047.- por la referida Ley 19.992; d) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123 y; e) bono extraordinario (ley 203874), la suma de \$21.256.000.000.- Concluye que a diciembre de 2015, el Fisco ha desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-

Manifiesta que, desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que pueda valorizarse para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Indica que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Agrega que como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, obteniéndose de ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Refiere luego, las reparaciones específicas. Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos. Señala que los actores han recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992 y sus modificaciones. Indica que la Ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas reconocidas como víctimas.

Afirma que se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Acto seguido, alude a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas. Manifiesta que tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación se realiza no sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones.



Foja: 1

Hace ver que se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del País. Indica que para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Expresa que además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario, con atención exclusiva a beneficiarios del programa. Adicionalmente, detalla otros tipos de beneficios a los beneficiarios y sus familias, en particular en el ámbito educacional y beneficios en vivienda.

Luego, expresa que, dentro de las reparaciones simbólicas, es importante que, en los procesos de justicia transicional, que la reparación de los daños morales causados a las víctimas de DDHH se realice mediante actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones, no a través de dinero sino mediante una reparación del dolor y tristeza producidos. Evidencia que parte de ello fue la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago del año 1993, el establecimiento mediante el Decreto N° 121, de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido, construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros.

Bajo el subtítulo “identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas”, sostiene que tanto la indemnización que se solicita en autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, de manera que no procede repararlos nuevamente. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de sus argumentos.

Reclama que dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de la reparación.

Concluye que estando la acción interpuesta de autos basada en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias que enunció anteriormente, y de acuerdo a los documentos oficiales que según dice acompañará a los autos, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la parte demandante.

Acto seguido, alega la prescripción extintiva de la acción de conformidad a los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Hace ver que según los relatos efectuados por los demandantes, los hechos que motivan la



Foja: 1

demanda ocurrieron entre el mes de julio – agosto de 1973, hasta julio-agosto del año 1976, por lo que se prolongaron por tres años aproximadamente, de manera que entendiéndose suspendida la prescripción durante el periodo de dictadura militar, por la imposibilidad de los propios demandantes de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, esto es, el 17 de julio de 2019, ha transcurrido en exceso el plazo de 4 años de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332. Luego, en subsidio de lo anterior, opone excepción de prescripción de 5 años de conformidad a los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.

Ahondando en los argumentos que sostienen la prescripción invocada, sostiene que la imprescriptibilidad de las acciones es excepcional, requiriendo siempre una declaración explícita, la que en este caso no existe. Añade que las normas de prescripción se aplican a favor y en contra del Estado. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de sus alegaciones.

Por otro lado, expone que los tratados internacionales invocados por el actor, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil, sino únicamente se refieren a la responsabilidad penal, citando jurisprudencia en este sentido.

Finalmente, postula que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, esto es, el artículo 2332 del Código Civil, y, en subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil.

En último término, se refiere al daño e indemnización reclamada, manifestando que, tratándose del daño puramente moral, la finalidad reparatoria no es alcanzable, así como tampoco resulta posible poner a la víctima en el lugar en que se encontraba antes de producirse el daño. Explica que la indemnización del daño moral solo sirve para otorgar a la víctima satisfacción, ayuda o auxilio para atenuar o morigerarlo.

En subsidio de las excepciones anteriores, de reparación y prescripción, solicita que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado (Ley 19.992, sus modificaciones y demás normas pertinentes), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. Indica que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos



Foja: 1

del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces, siendo también pertinente que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Finalmente, hace presente que los reajustes solo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Por otro lado, indica que los intereses se deben solo cuando el deudor ha sido reconvenido y retardado el cumplimiento de la sentencia.

Mediante presentación de fecha 15 de agosto de 2019 a folio 9, la parte demandante evacuó el trámite de réplica, reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda de autos, además de lo siguiente:

En cuanto a la alegación que hace el demandado consistente en “una excepción de reparación satisfactiva o integral”, afirma que esto no es óbice para que se le indemnice mediante un monto fijado por un Tribunal de la República, y que tal excepción resulta irreconciliable con la normativa internacional invocada en la demanda.

Luego, expone las razones para rechazar la excepción de prescripción alegada por el Fisco, indicando que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha sido enfática en que tratándose de delitos de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, así, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre derechos humanos, la que es integrante del ordenamiento jurídico nacional. Cita jurisprudencia en apoyo de sus argumentos.

Estima que los montos de la indemnización son ajustados a derecho, sin perjuicio de que ello es una materia que determinará el Tribunal. Agrega que los reajustes e intereses exigidos en el libelo igualmente se ajustan a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico.

Por presentación de 26 de agosto de 2019 a folio 11, la parte demandada evacuó la réplica, reitera todas las excepciones, alegaciones y defensas opuestas en su escrito de contestación de demanda.

Por resolución de fecha 28 de agosto del año 2019, se recibió la causa a prueba por el término legal.



Foja: 1

Con fecha 08 de abril del año 2022, a folio 55, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en estos autos, don Juan Manuel Segovia Arrué, don Carlos Enrique González Mejías, don Carlos Vidal Alvarado González, don Sergio Jacinto Villar Veloso y don Víctor Manuel Reiman Campos, debidamente representados, deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, todos ya individualizados, a fin de que sea condenada a pagarles de la suma de \$200.000.000.- a cada uno de ellos, por los daños morales sufridos a consecuencia de la detención ilegal, condena por consejo de guerra, torturas y vejaciones a que se vieron sometidos desde el año 1973 y por diversos periodos de tiempo en cada caso, que derivaron en diversas situaciones familiares, como exilio, todo a consecuencia de los hechos latamente descritos en lo expositivo.

SEGUNDO: Que por su parte el demandado Fisco Chile compareció a la instancia contestando y duplicando la demanda de autos, solicitando en definitiva el rechazo de la demanda en todas sus partes, oponiendo las excepciones de reparación satisfactiva y la de improcedencia de la indemnización por haber sido ya indemnizados los demandantes. Seguidamente, alega la prescripción extintiva de la acción por haber transcurrido en exceso el plazo de 4 años contemplado en el artículo 2332 del Código Civil cuya aplicación estima procedente, y en subsidio, la prescripción extintiva ordinaria de 5 años, objetando, en subsidio de todo lo anterior, la reducción del monto indemnizatorio exigido por los actores a título de daño moral, solicitando que en la regulación de éste se consideren los pagos, pensiones e indemnizaciones que ha recibido la parte demandante.

TERCERO: Que la presente controversia radica en determinar si en la especie concurren los requisitos de la responsabilidad patrimonial del Estado y, en consecuencia, si el Fisco se encuentra obligado a indemnizar el daño moral reclamado por los actores, con ocasión de las detenciones, torturas y demás hechos relatados en lo expositivo y las consecuencias que ello produjo en sus vidas, hechos que experimentó en el contexto político del régimen militar de 1973, con anterioridad y posterioridad al mismo.

CUARTO: Que la responsabilidad civil tiene por finalidad reparar económicamente a la víctima o con mayor precisión, compensar el daño sufrido por ésta como consecuencia de un hecho ilícito. En este sentido, lo que se busca es proporcionar a la víctima, una cantidad de dinero que le permita sobrellevar de mejor manera el daño sufrido, mediante el goce y disfrute de otras cosas, atendido el carácter transaccional de éste. En razón de ello, se dice que la indemnización monetaria no es una genuina reparación, pues no hace desaparecer el daño ni mucho menos el hecho generador de éste, sino que más bien, otorga los medios económicos a la



Foja: 1

víctima para que ésta encuentre satisfacción en la adquisición de bienes o servicios.

QUINTO: Que, en lo concerniente a la responsabilidad del Estado y sus órganos, el principio general expresado anteriormente se ha concretizado bajo la institución de la falta de servicio, criterio general de atribución equivalente a la culpa o negligencia que funda la reparación de los daños extracontractuales. De aquí que la doctrina y jurisprudencia, estimen que la responsabilidad civil o patrimonial de los órganos públicos puede ser perseguida, ya sea de acuerdo a las normas de derecho público (Constitución Política de la República, Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, etc.), como a partir de la normativa de derecho privado (arts. 2314 y ss. del Código Civil).

SEXTO: Que en este sentido si bien en la actualidad, es un lugar común hablar de la unidad de responsabilidades públicas y privadas a fin de garantizar reglas y principios equitativos para los particulares que buscan la reparación de sus daños ocasionados por el Estado, ello no conlleva un desconocimiento de las peculiaridades de las relaciones de derecho público (administrativa, legislativa y judicial), en particular, respecto del complejo contenido y finalidad que el órgano estatal persigue con cada una de sus actuaciones.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, la acción civil aquí deducida en contra del Fisco, tendiente a obtener la reparación íntegra de los perjuicios que ha sido ocasionado a los actores, encuentra también su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

OCTAVO: Que estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.



Foja: 1

NOVENO: Que a fin de acreditar lo correspondiente, la parte demandante acompañó los siguientes documentos a la carpeta electrónica, los que se dividirán respecto de cada uno de los actores.

Respecto de don Juan Manuel Segovia Arrué: 1) Informe policial N° 62 de la Policía de Investigaciones en el cual se detalla que don Juan Segovia Arrué fue detenido en Valparaíso el día 24 de agosto de 1973; 2) Copia de carpeta Valech, entregada a la víctima por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que contiene su ficha de ingreso y certificado emitido por el Juzgado Naval que establece la pena a la que fue sometido y el hecho de haberse dado cumplimiento a la misma; 3) Copia de carta suscrita por Federico Horn, Capitán de Navío de la Armada de Chile, dirigida al actor, en la que se le informa que ha sido preseleccionado para realizar un curso en la Escuela de Artillería y Torpedos; 4) documento en francés, sin traducción; 5) Certificado emitido por el Juzgado Naval de fecha 25 de noviembre de 1976, en el cual consta que don Juan Manuel Segovia Arrué fue condenado a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio y que esta fue cumplida en su totalidad; 6) Copia de ficha del “Programa de Retorno”, en la que se encarga la tramitación de la amnistía para el Sr. Segovia Arrué, firmada por Luis Abalos Portas; 7) Fotografía que se atribuye a publicación de Diario El Mercurio de Valparaíso.

Respecto del demandante don Carlos Enrique González Mejías: 1) Copia de querella en causa 980-2008, en la que no figura el actor como querellante; 2) informe policial N° 62 de la Policía de Investigaciones, en el cual se detalla que don Carlos González Mejías fue detenido en Talcahuano; 3) Copia digital de carpeta Valech, que contiene su Ficha de ingreso de preso político y/o torturado; 4) Copia de ficha de solicitud de reconocimiento de calidad de exonerado por razones políticas, del Ministerio del Interior, fechado el 08 de enero de 1999.

En cuanto al demandante don Carlos Vidal Alvarado González: 1) Informe policial N° 62 de la Policía de Investigaciones, en el cual se recaba el testimonio de Tomas Segundo Alonso Molinet, quien declara haber sido detenido junto al actor, de don Pedro Lagos Carrasco quien declara haber conocido a Carlos Alvarado mientras se encontraba en la Cárcel Pública de Valparaíso, donde ingresó el 14 de diciembre de 1973; 2) Copia digital de carpeta VALECH que contiene su ficha de ingreso de preso político y/o torturado y su relato.

Respecto de don Sergio Jacinto Villar Veloso; 1) Copia de Querella en causa 980-2008; 2) Informe policial N° 62 de la Policía de Investigaciones en el cual se detalla que el demandante fue detenido en Talcahuano, específicamente en “ASMAR”; 3) Declaración judicial de don Sergio Edinson Fuentes Paredes en la causa 980-2008; 4) Copia de carpeta Valech, entregada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que contiene el listado de presos políticos proporcionado por FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas), su ficha de ingreso de Preso



Foja: 1

Político y/o torturado y ficha interna con registro de detenciones; 5) Copia simple de diario, donde se detallan los detenidos en Talcahuano, dentro de los cuales se encuentra don Sergio Villar Veloso.

En cuanto al demandante don Víctor Manuel Reiman Campos: 1) Querella en causa 980- 2008; 2) Informe de daño a causa de prisión política, tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, emitido por el Programa de Atención y Reparación Integral en Salud PRAIS; 3) Informe policial N° 62 de la Policía de Investigaciones, en el cual se detalla que don Víctor Reiman Campos fue detenido en Talcahuano, específicamente en “ASMAR”; 4) Copia de noticia de “Diario Color”, donde se publica la nómina de los detenidos, reos y procesados de la Armada; 5) Copia de diario El Mercurio (sábado 20 de agosto 1983) donde se publica la nómina de los exilados autorizados a regresar, entre los que se encuentra Víctor Manuel Reiman Campos; 6) Copia de Diario el Sur; 7) Carta de Víctor López a La Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura del 9 de febrero de 2004; 8) Copia digital de carpeta Valech, entregada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que contiene el historial médico de Víctor Reiman Campos, en sueco, traducido por el propio actor, su ficha de ingreso de preso político y/o torturado.

DÉCIMO: Que de otro lado, previa solicitud de la parte demandada, se ordenó oficiar al Instituto de Previsión Social, a fin de que informe sobre todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos total que -como beneficiario de las Leyes N°19.123, 19.234, 19.992 y 20.874- se hubiesen otorgado a los demandantes, información que fue recepcionada por el tribunal con fecha 13 de septiembre de 2019 a folio 13, y que en síntesis consigna que aquellos han recibido las siguientes cantidades: Don Juan Segovia Arrué: la suma de \$25.885.692.- entre octubre de 1998 a agosto de 2019 por concepto de pensión como exonerado, más la suma de \$19.224.302 por pensión Ley N° 19.992, Bono Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$555.422.-, ascendiendo la pensión actual a \$178.860.-, con un total pagado de \$46.665.416.-

Don Carlos Alvarado González: la suma de \$25.311.297.- entre junio de 2006 a agosto de 2019, Bono Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$411.966.-, ascendiendo la pensión actual a \$211.053.-, con un total pagado de \$26.723.263.-

Respecto de los demandantes don Carlos González Mejías la suma total pagada es de \$9.455.684.-; don Sergio Jacinto Villar Veloso el monto de \$6.324.712.- y a don Víctor Reiman Campos la suma de \$9.415.431.- Respecto de ellos el Instituto de Previsión Social informó que no le es posible informar montos recibidos de pensión no contributiva como exonerados políticos, por cuanto reciben dicho beneficio en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

UNDÉCIMO: Que, a folio 53 consta haberse rendido prueba testimonial de la parte demandante, consistente en los dichos de don Pedro



Foja: 1

Pablo Blaset Castro y don Carlos Avelino Bastias Kessi, quienes legalmente juramentados, sin tacha y dando razón de sus dichos, fueron contestes en que conocieron a los demandantes por haber vivido junto a ellos la detención con ocasión del golpe militar del año 1973, el primero por ser también funcionario de la Armada y saber del posterior traslado a centros de detención, donde fueron objeto de torturas y apremios ilegítimos, acusados de sedición o motín frustrado. El primero de los testigos igualmente fue procesado en la causa Rol 3926-1973.

Saben respecto de lo declarado por conversaciones con los actores de los tratos que le afectaron, su traslado a recintos militares para ser interrogados, los que se extendieron en el tiempo. La detención se extendió según las condenas impuestas, por distintos periodos de tiempo, desde 3 años y un día hasta 5 años.

Indican que también fueron trasladados a distintos campos de concentración, al interior de Colliguay, a Quinteros y a otros lugares; la isla Quiriquina respecto de los detenidos en Concepción, en la base naval de Talcahuano y también en la Escuela de Infantería de Marina, en Agosto del año 1973.

Ambos se refirieron a las dificultades que tuvieron luego de que fueron dejados en libertad, las dificultades de sueño, su inseguridad, traumas, ideas suicidas, persecución y el exilio de algunos, la frustración de su carrera y con ello la pérdida de sus expectativas de vida. El segundo testigo manifestó que muchos, como es su caso, mantienen tratamiento con psiquiatras y psicólogos, sumado a un régimen medicamentoso.

DUODÉCIMO: Que son hechos establecidos en la causa, al no haber sido controvertidos por las partes y por encontrarse además acreditados con el mérito de la prueba producida por la demandante, de conformidad a lo prescrito por los artículos 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, que los demandantes, todos integrantes de la Armada de Chile, fueron detenidos sin orden judicial y fueron víctimas de una serie de actos vejatorios, denigrantes y de torturas, por diversos periodos de tiempo, trasladados a distintos centros de detención, como la Isla Quiriquina, alejándolos aun mas de sus familiares, todos hechos que configuran violaciones a los derechos humanos por agentes del estado de Chile, específicamente por miembros de la propia institución castrense a la que pertenecían.

Asimismo, consta que todos los actores han sido reconocidos formalmente como víctimas de violaciones a los derechos humanos en época de dictadura, lo cual se desprende de los aludidos informes y declaraciones testimoniales asociados a cada uno de ellos, además de la información emitida por el Instituto de Previsión Social en que aparecen registrados como beneficiarios de prestaciones pecuniarias por el Estado, por lo que, a la luz de lo anterior, resulta posible tener por acreditada la efectividad de lo siguiente:



Foja: 1

1) Juan Manuel Segovia Arrué, cédula de identidad N° 5.231.994-3, ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el N° 22.920.

Fue detenido el 07 de agosto de 1973 en el buque Blanco Encalada, trasladado al cuartel Silva Palma y al Fuerte Borgoño, lugares donde lo golpearon repetidas veces y le interrogaron bajo amenazas. En el mes de septiembre fue trasladado a la cárcel de Valparaíso, sufriendo de agresiones y un trato degradante. Posteriormente se le traslado a campo de confinación denominado “Melinka” en la localidad de Collihuay, para luego de 8 meses ser transportado a otro campamento denominado Ritoque, para tres meses después ser conducido a la cárcel de Valparaíso el 25 de abril de 1975, lugar del que salió en agosto de 1976, luego de tres años y tres meses.

2) Carlos Enrique González Mejías, cédula de identidad N° 5.942.875-6, ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el N° 10.345.

Fue detenido el 09 de agosto de 1973 en Talcahuano y estuvo detenido en el denominado “Fuerte Borgoño”, trasladado a la cárcel de Concepción, lugares en que fue víctima de diversas torturas y vejaciones. Luego de su liberación fue exiliado a Alemania.

3) Carlos Vidal Alvarado González, cédula de identidad N° 5.044.638-7, ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el N° 955. Fue detenido sin orden judicial en el mes de julio de 1973, fue trasladado al cuartel Silva Palma, a la cárcel pública de Valparaíso, los campos Melinka y de Puchuncaví.

4) Sergio Jacinto Villar Veloso, cédula de identidad N° 5.410.558-4, ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el N° 26.515. Fue detenido en agosto de 1973 en su lugar de trabajo junto a otro de los actores, don Víctor Reiman, lugar desde el que fue trasladado maniatado y con los ojos vendados al Fuerte Borgoño para ser interrogado con torturas y tratamientos inhumanos; igualmente fue desplazado al gimnasio naval y confinado en la cárcel de Concepción hasta el 23 de agosto de 1976. Partió al exilio el 123 de abril de 1977 con destino a Suecia.

5) Víctor Manuel Reiman Campos, cédula de identidad N° 6.544.074-1, ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el N° 20.155.

Fue detenido el 9 de agosto de 1973 en los Astilleros de ASMAR en Talcahuano y trasladado al Fuerte Borgoño, permaneciendo además en el estadio de la base naval, el gimnasio de la Isla Quiriquina y el cuartel



Foja: 1

Rodríguez de la Armanda, para finalmente ubicarlo en la cárcel de Concepción hasta el 26 de agosto de 1976, luego de haber sido condenado a la pena de 3 años y un día por el delito de sedición o motín frustrado, pese a que en ese momento ya había cumplido 3 años y 15 días de encarcelado.

Todos los demandantes fueron objeto de torturas, caracterizadas por palizas, golpes, inmersiones en aguas inmundas, y otras de carácter psicológico.

DÉCIMO TERCERO: Que en relación al primer supuesto, esto es, la existencia de un hecho antijurídico, conforme a la naturaleza de la materia y hechos sobre los que versa la litis, cabe consignar que del mérito de las probanzas reseñadas en los motivos anteriores, ha quedado acreditado en autos, que efectivamente los actores fueron detenidos y privados de libertad en forma ilegal desde el mes de agosto-septiembre de 1973 por agentes del Estado, pasando por diversos recintos de detención en la ciudad de Vaparaíso, Talcahuano y Concepción, los denominados centros Melinka, Puchuncaví, el Fuerte Borgoño o el cuartel Silva Palma, donde padecieron procedimientos de interrogación y torturas, conocidos por su crueldad e intensidad, hasta su liberación en los diversos periodos ya reseñados en el motivo anterior.

DÉCIMO CUARTO: Que las conductas descritas dan cuenta de la comisión de actos ilegales y arbitrarios, que afectan lo más esencial de los seres humanos, como son la vida, integridad física y psíquica y dignidad y que por su extensión y alcance trascienden al propio individuo, afectando a la humanidad toda, y por tanto se encuadran en el concepto de delito de lesa humanidad.

DÉCIMO QUINTO: Que en efecto, consta en la documental y testimonial rendida, en particular en el hecho de que los actores sabidamente son reconocido como víctima de violaciones a los derechos humanos como consta en los registros de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, al igual que los antecedentes que obran en el documento remitido por el Instituto de Previsión Social, todo lo cual constituyen prueba irrefutable de la detención ilegal y trato vejatorio, así como lesiones físicas de los demandantes, así como la privación de su libertad de parte de agentes del Estado, circunstancias y antecedentes que permiten a esta juez tener por probada la existencia de los hechos antijurídicos que se invocan.

En consecuencia, ha queda demostrado que el Estado obró con total irrespeto a los derechos humanos al detener y privar de libertad en forma arbitraria e ilegal a cada uno de los demandantes

DÉCIMO SEXTO: Que los perjuicios sufridos por los actores aparecen como consecuencia natural y lógica de todo lo vivido, detención ilegal, tortura física, psíquica, así como el hecho de permanecer en diversos recintos por extensos periodos de tiempo, todos hechos que indudablemente afectan de sobremanera la vida de cualquier persona, provocando entre



Foja: 1

otras cosas, trabas para la estabilidad emocional familiar y social, circunstancias que puedes presumirse grave y fundadamente de los antecedentes tenidos a la vista, antecedentes que permiten a esta sentenciadora tener por acreditadas los daños reclamados por estos, cuyas consecuencias y secuelas psicológicas pueden extenderse por larga data, y que por supuesto dan cuenta del vínculo causal entre los hechos delictivos acreditados y el daño padecidos por cada uno de ellos, puesto que de no mediar lo primeros jamás se habrían producido los segundos.

Sin perjuicio de lo anterior, relevante resulta destacar que sobre la entidad de este daño, no se ha rendido mayor prueba por los actores, más allá de la testimonial aparejada a folio 53, la que si bien permite establecer ciertos aspectos sobre este punto, no es suficiente para la determinación en cada caso de la extensión y magnitud del daño irrogado, siendo menester recurrir a las máximas de experiencia y los criterios latamente sostenidos por la jurisprudencia nacional.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que habiéndose acreditado la existencia del daño moral que se reclama de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde pronunciarse sobre las defensas de la demandada.

DÉCIMO OCTAVO: Que en torno a la excepción de *prescripción extintiva* de la acción, incoada plateada por la demandada, huelga tener presente que el hecho que motiva esta acción, es de aquellos que la doctrina y tribunales superiores de justicia reconoce como graves crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establece los Convenios de Ginebra del año 1949, toda vez que estos hechos y especialmente los descritos en el motivo 12° ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, período en que se vulneraron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o a simples civiles que no adherían a ningún movimiento político, con el único fin posible de amedrentar al resto de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

DÉCIMO NOVENO: Que cabe precisar que la acción indemnizatoria que se deduce se encuentra sustentada en las torturas acreditadas que ha sufrido el actor por el Estado Chileno con enorme poder de coerción y uso de fuerza, vulnerándose con aquello lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma última que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes que así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a índole humanitaria proveniente de los derechos de todos ser humano reconocidos en el tratado internacional indicado, que prima de acuerdo a las normas de derecho interno en específico al artículo 2497 del Código Civil.

VIGÉSIMO: Que por otro lado sustenta la tesis de inaplicabilidad de la norma del Código Civil antes mencionada por el artículo 2° de la



Foja: 1

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5° de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

En efecto, ya la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, por lo que resultaría incoherente entender que la acción de reparación está sujeta a normas de prescripción, puesto que ello atenta los principios del Derecho Internacional que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, numerando quinto, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en especial su capítulo segundo; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que dado que los Derechos Humanos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4° la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.

VIGÉSIMO CUARTO: Que de otro lado, debe tenerse presente que no nos encontramos frente a una acción de indemnización de perjuicios “común” que derive de relaciones contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que como se dijo, nos encontramos ante una



Foja: 1

acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el *ius cogens*, propias del Derecho Internacional; así y de acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, es así que habiendo ratificado Chile la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma, que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.

VIGÉSIMO QUINTO: Que por otra parte el artículo 2332 del Código Civil señala que: “*las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto*”; el artículo 2514 señala que: “*la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible*”; finalmente el artículo 2515 de igual cuerpo legal señala que el tiempo es de 5 años para las acciones ordinarias.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, en ese contexto, el estatuto del derecho privado chileno regula relaciones entre particulares, regidas por los principios de la autonomía de la voluntad y en plano de igualdad, cuestión inaplicable al caso *sub lite*, donde se busca regular y sancionar en el ámbito de derecho público, relaciones verticales del Estado con los particulares, determinando las responsabilidades que éste tenga por las afectaciones de derechos por parte de sus agentes.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que resulta inconcuso que tratándose del resarcimiento de las transgresiones a los Derechos Humanos, la fuente de responsabilidad civil o el estatuto aplicable, no puede encontrarse en nuestro Código Civil, toda vez que las normas de regulación y protección de tales derechos son posteriores a nuestra codificación, y las ahí contenidas no fueron concebidas por Bello para la solución de problemas contemporáneos, como el de marras, para los cuáles ha devenido el desarrollo de nuevas concepciones al amparo del Derecho Internacional, el que incorporado en virtud del artículo 5° de nuestra Constitución Política, resulta absolutamente vinculante y obligatorio.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que así, en el caso *sub lite*, la detención ilegal y privaciones de libertad de los actores, constituyen en el hecho actividades ilegítimas llevadas a cabo al margen de la juridicidad y constitucionalidad, por ende, se trata de un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo al Derecho Internacional a través de normas de *Ius Cogens*, del Derecho Consuetudinario y Derecho Convencional donde se ha declarado



Foja: 1

su imprescriptibilidad, sin distinción alguna de si ello alude a las acciones penales y civiles, sin que pueda estimarse dicha omisión como suficiente para interpretar dicho cuerpo normativo en contra de sus beneficiarios naturales, lo que no sería sino contrariar su historia fidedigna.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, en efecto, el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que cuando haya violación de un derecho o libertad habrá derecho al pago de una justa indemnización a la parte lesionada, y el artículo 1.1 trata de las obligaciones de respeto y garantía por parte de los Estados partes de las disposiciones contenidas en tal pacto, relativas al respeto y protección de derechos fundamentales.

TRIGÉSIMO: Que así resulta inocuo aplicar las normas del Código Civil y declarar prescritas acciones indemnizatorias ordinarias emanadas de violaciones a derechos fundamentales, por ser contrarias al orden jurídico internacional, que traducido en Convenios y Tratados y por clara disposición constitucional, son vinculantes para Chile, como ha reconocido y declarado abundante jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, entre otros, en el homicidio de Fernando Vergara, los denominados caso Liguña, Caravana de la Muerte -capítulo San Javier-, Secuestro y Desaparición de Darío Miranda Godoy y Jorge Solovera Gallardo y secuestro y desaparición de Sergio Tormen Méndez.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República establecen los principios de igualdad ante la ley de gobernantes y gobernados, siendo responsables tanto de sus acciones como de sus omisiones, asimismo el artículo 4º de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, señala que éste será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado, normas que en conjunto con los tratados internacionales vigentes en Chile, reafirman el deber de responder y resarcir los daños, normas que carecerían de toda validez y operatividad de aplicarse las reglas y plazos del derecho común a materias de tan alto dolor y conocimiento público, como son las violaciones a los Derechos Humanos.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, por lo señalado precedentemente, esta sentenciadora estima que los cómputos de los plazos establecidos en los artículos 2332 y 2515 no son aplicables en la especie, entran en directa contradicción con normas internacionales, normas de *Ius Cogens*, el Derecho Consuetudinario y el Derecho Constitucional, desechándose así la prescripción invocada por la demandada.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que seguidamente, en lo tocante a la defensa de la demandada invocada como excepción de “*reparación satisfactiva*”, cabe señalar que de acuerdo a la información remitida por el Instituto de Previsión Social, los demandantes han recibido beneficios



Foja: 1

pecuniarios por parte del Estado por el hecho de haber sido calificados como víctimas de violaciones a los derechos humanos, percibiendo cada uno las sumas detalladas en el motivo 10°.

Sobre este punto, huelga precisar al respecto que la Ley 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala, dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios a través de los cuales el Estado Chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una supuesta incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, en este sentido, el propio artículo 4° de la citada ley dispone que: *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

En consecuencia, se concluye que aun cuando el actor es beneficiario, las mencionadas leyes en parte alguna establecieron una incompatibilidad entre los beneficios que otorga y las indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que asimismo, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral, en consecuencia, los beneficios establecidos en la Ley 19.123 y 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, cuya cuantía y para el caso que sea procedente será determinada en este juicio.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, en consecuencia, la acción de indemnización por daño moral impetrada, en caso alguno resulta incompatible con los beneficios que ha recibido el actor, a cualquier título y en cualquier momento, de manera tal que se rechazará la excepción alegada de reparación satisfactiva, sin perjuicio de considerarse estos al momento de cuantificar la indemnización por daño moral, como se dirá.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, así las cosas, desechadas que fueren las defensas fiscales, y establecida la existencia del ilícito y su relación causal con los daños y perjuicios invocados, corresponde ponderar los antecedentes para determinar la entidad del daño moral provocado.

En este sentido –y como se dijo anteriormente– la prueba rendida sobre este punto resulta insuficiente para establecer claramente el quantum



Foja: 1

del daño a indemnizar, pues sólo obra en autos la declaración testimonial de folio 53.

Sin perjuicio de ello y respecto del demandante don Víctor Reiman, a folio 47 se acompañó el informe de daño a consecuencia de prisión política, tortura, u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, realizado por el PRAIS de Concepción, según evaluaciones realizadas entre los meses de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020, la que en su conclusión consigna la existencia de trastorno de estrés post traumático y que el daño bio-psico- social que implica la prisión política, la tortura y el exilio hace necesaria atención terapéutica especializada.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, sin perjuicio de la deficiencia probatoria anotada, no puede desconocerse que los hechos que fueron infligidos a los demandantes, los que se extendieron por años, provocan en cualquier ser humano una afectación psicológica grave, permanente y extendida, pues ser objeto de tratos impensados, en extremo dolorosos, buscando provocar miedo y angustia psíquica, siendo tratados como objetos desechables por sus propios compañeros de armas, alejados de sus familias, y con un alto grado de incertidumbre sobre el futuro, produce un desasosiego de enorme entidad, todo ello como consecuencia del actuar de agentes del Estado, llevan a concluir necesariamente que la acción indemnizatoria reclamada por los actores es procedente.

Que para la determinación del quantum, esta juez tendrá en especial consideración que los hechos que afectaron a los actores lo fueron en su ambiente de trabajo, por agentes del estado de su misma rama militar, c sometiénolos a la humillación y cuestionamiento de su honor profesional, así como haber sido condenados espureamente por Consejos de guerra, de los que no se tienen mayores antecedentes para sostener su legitimidad, siendo todos jóvenes, con familia, y que luego de cumplidas las presuntas condenas, de mas de 3 años, recuperaron su libertad, pero no dejaron sus padecimientos, llevándolos a cambiar el rumbo de su vida, incluso hacia el exilio, todo lo que cual lleva a esta sentenciadora a regular prudencialmente a reparación en la suma de \$40.000.000.- para cada uno, que por via de compensación pueda resarcir de alguna forma lo padecido, atendida la gravedad de las consecuencias que en su vida tuvo la violación a sus derechos humanos, que fuera reconocida como víctima del Estado Chileno.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior, tal como se dijo con anterioridad, de acuerdo al documento acompañado a los autos emitido por el Instituto de Previsión Social, los actores reciben diversos ingresos por parte del Estado, dineros que si bien no constituyen una reparación integral como pretendía la demandada, dicho antecedente ha sido considerado por esta sentenciadora al momento de cuantificar el daño moral sufrido por los demandantes.

CUADRAGÉSIMO: Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran lo resuelto precedentemente.



Foja: 1

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, atendido el carácter declarativo del proceso, la suma ordenada pagar sólo devengará intereses y reajustes, una vez que se encuentre firme o ejecutoriada y hasta su pago efectivo.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que atendido el mérito de lo razonado anteriormente y el hecho que la demandada no controvertió sustancialmente los hechos, cada parte pagará sus costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley N° 19.992, ley N° 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación del daño y de prescripción deducidas por la demandada;

II.- Que **se acoge parcialmente** la demanda de fecha 26 de junio de 2019, condenándose al Fisco a pagar a cada uno de los actores Juan Manuel Segovia Arrué, Carlos Enrique González Mejías, Carlos Vidal Alvarado González, Sergio Jacinto Villar Veloso y Víctor Manuel Reiman Campos la suma de 40.000.000.- (cuarenta millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por daño moral,

III. – Que la suma ordenada pagar devengará reajustes e intereses desde que el presente fallo quede ejecutoriado y hasta su pago efectivo.

IV.- Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese, consúltese sino se apelar.

Dictada por Doña Rocio Pérez Gamboa, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta de Noviembre de dos mil veintidós**

